

Análisis de Coyuntura

REVISTA MENSUAL

MAYO DE 2006

AÑO V • Nº 71

2 PESOS

ISSN 1669- 9122

Situación Mundial

La inmigración ilegal
en EE.UU.

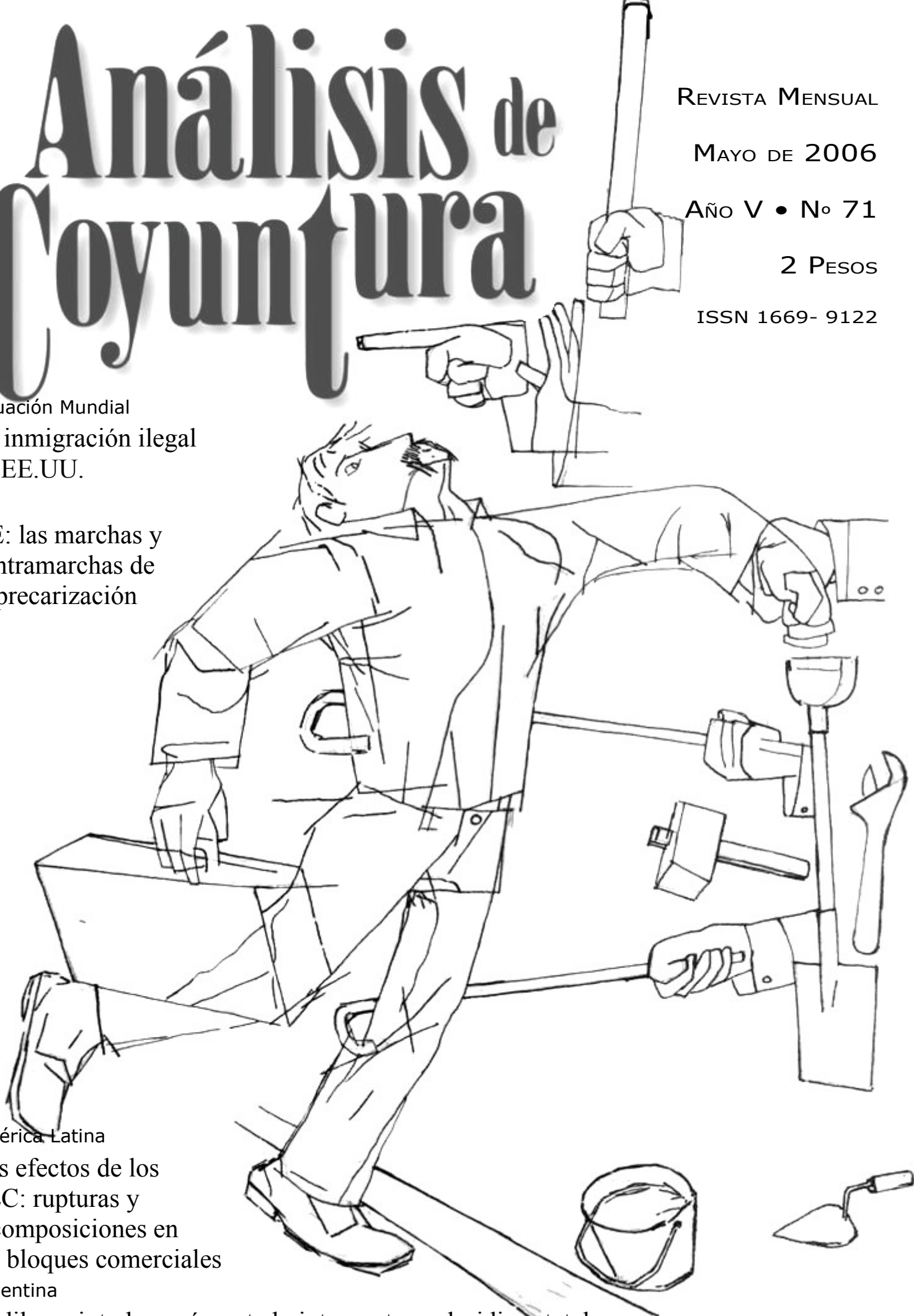
UE: las marchas y
contramarchas de
la precarización

América Latina

Los efectos de los
TLC: rupturas y
recomposiciones en
los bloques comerciales

Argentina

El dilema interburgués: estado interventor o desidia estatal



Análisis de Coyuntura

REVISTA MENSUAL
MAYO DE 2006
AÑO V • Nº 71
ISSN 1669- 9122

Equipo de trabajo: Claudio Adrianzen, Ezequiel Alfieri, Santiago Juncal, Sebastián Juncal, Julián Kan, Florencia Mazzadi, Sebastián Ortiz, Mariano Ronzoni, Diego Tavormina, Fabián Ulmann, Alejandro Viegas, Martín Yuchak, Sergio Zisman. Dibujo de tapa: Ariel Muñiz.

Responsable de la publicación: Alejandro Viegas

Fuentes consultadas: EE.UU.: *GovExec.com* (GE); *New York Times* (NYT); *Usa Today* (UT); *Wall Street Journal* (WSJ); *Washington Post* (WP). – Francia: *Le Figaro* (LF); *Le Monde* (LM) – Gran Bretaña: *The Economist* (TE); *BBC News* (BBC) – España: *El País* (EP); suplemento Nueva Economía de *El Mundo* (NEEL) – México: *La Jornada de México* (LJdM) – Venezuela: *El Universal* (EUn) – Colombia: *El Tiempo* (ET) – Bolivia: *Los Tiempos de Cochabamba* (LTC) – Perú: *La República* (LR) – Brasil: *Folha de Sao Paulo* (FSP); *O estado do Sao Paulo* (OSP); *Folha da Tarde-Folha de Sao Paulo* (FDT-FSP) – Argentina: *Clarín* (C); *La Nación* (LN); *Página 12* (P/12)

Para contactarnos: informecon@yahoo.com.ar

En este número

SITUACIÓN MUNDIAL ofrece, como otras veces, contrastes entre EE.UU. y la Unión Europea. El país norteamericano busca definir cómo tratar a los más de 10 millones de trabajadores extranjeros que residen allí ilegalmente. La muy notoria novedad fue el hecho de que, ante la perspectiva de una legislación draconiana que impone la criminalización y deportación de los inmigrantes ilegales, millones de afectados se movilizaron.

Por su parte, la UE se nos muestra en franca lucha por definir las condiciones de contratación laboral de sus propios ciudadanos, que, como asalariados, “sobran” de modo crónico para las necesidades del capital. También aquí, la tónica la impuso la movilización: una fuerza social que unió a estudiantes universitarios y trabajadores impuso un retroceso a las medidas de flexibilización en Francia.

En ambos casos, hay algo más que movilizaciones masivas con capacidad para detener las iniciativas políticas más reaccionarias. Se trata de la firmemente establecida segmentación de los trabajadores, sancionada desde el Estado: en ambos espacios, ni la plena ciudadanía ni los derechos laborales plenos cubren a toda la población.

En AMÉRICA LATINA, seguimos viendo la complejidad del proceso de integración de sus Estados nacionales. En este sentido, surgen tensiones insalvables a partir de las divergencias de intereses entre las fuerzas sociales que conducen los diferentes Estados. Así, muerto el ALCA, varios Tratados de Libre Comercio bilaterales están suficientemente vivos como para fragmentar espacios de integración regional como la Comunidad Andina de Naciones o para disparar serias dudas sobre cómo continuará el Mercosur. Y, como ominoso recordatorio de que la integración con EE.UU. no trae sólo el acceso al mayor mercado consumidor del mundo, tenemos al presidente mexicano tratando –algo infructuosamente– de actuar como paladín de sus compatriotas emigrados, quienes en buena parte protagonizan las movilizaciones arriba mencionadas.

El análisis de la situación de la ARGENTINA muestra explícitamente algunos de los límites la *alianza social* que se expresa actualmente en el gobierno del Estado. *Por arriba*, en torno a qué rol puede o debe tener el Estado en la economía a partir del conflicto por el precio de la carne. *Por abajo*, advertimos que los paños fríos que podría traer la recomposición salarial deja sin cambios a más de la mitad de los trabajadores –que están *en negro* o desempleados. Al mismo tiempo, continúa lejos de restablecerse la canalización de los reclamos de la gente a través de las instituciones representativas, superadas por la práctica de la democracia directa, o *inmediata*, como gustan de llamar algunos medios.

Adelante...

Situación Mundial

4 Marchas y contramarchas de la precarización en la UE

La batalla por el Contrato de Primer Empleo en Francia

La Europa de los “contratos basura”

7 El problema de la inmigración ilegal en EE.UU.

Apertura: defenderse atacando (a los peones primero)

Medio juego: buscar la ventaja

Final: cuando hay menos piezas se ve más claro.

América Latina

12 Pelea por las ganancias

Uruguay y Paraguay en el Mercosur

Contra un TLC de urgencia y sin legitimidad

Venezuela: ruptura de la CAN y acercamiento con el Mercosur

Ecuador: intencionalidades que complican la firma del TLC

Brasil y el recambio de Palocci: *siempre igual, todo igual, siempre lo mismo...*

16 Coyuntura política

Perú: resultados parciales y alianzas predichas

17 Seguridad

Algunos datos generales sobre la migración latinoamericana

Migración y EE.UU.: la encrucijada de México

Argentina

18 Pelea por las ganancias

La lucha por la distribución de la riqueza social. Los límites de la *alianza social*

La *intervención* del Estado nación en la producción y distribución de carnes

22 Coyuntura política

La *intervención* del Estado nación en el conflicto social

Situación Mundial

En el *Análisis* N° 65 (noviembre de 2005), abordamos concatenados los sucesos que ocurrían en Francia y EE.UU. Desde abajo, la violenta emergencia de las capas más pobres del proletariado y lumpenproletariado, en los suburbios de las grandes ciudades francesas. Desde arriba, el tratamiento de la situación de los inmigrantes ilegales por parte del Congreso norteamericano, a partir del cuál se privilegiaba una salida represiva a un problema cuya velocidad de crecimiento perjudicaba cada vez a más fracciones de la burguesía. Cada uno a su manera, éstos versaban sobre el problema de la forma de incorporación de sectores “marginados” de la sociedad. Tomamos cuidadosamente esta calificación porque, a nuestro entender, no se encuentran al margen del proceso productivo en su conjunto. Considerar que globalmente están “fuera” de esta sociedad, supone

aceptar la visión construida paciente y delicadamente acerca de ellos por los medios. Dicha resignificación simbólica los hizo acreedor del atributo de la invisibilidad con la que tanto soñaron las audiencias cinematográficas, pero sin cosechar la fama que ésta pudiese haber representado para ellos. En este *Análisis* veremos que el divorcio de la realidad y algunas de sus versiones no puede ser eterno, aunque el despertar sea un acto plagado de incertidumbre y miedo para sus protagonistas principales. Antes de analizar lo que para algunos es un mágico acto de aparición de sujetos sociales inexistentes, nos permitimos recomendar la lectura previa del *Análisis* mencionado, donde se abordaron las principales características de los procesos inmigratorios y su impacto sobre la sociedad receptora.

Marchas y contramarchas de la precarización en la UE

La batalla por el Contrato de Primer Empleo en Francia

Desde fines de marzo y, con una intensidad notoria, desde mediados de abril, ganó espacio en la prensa mundial la movilización francesa en oposición al Contrato de Primer Empleo (CPE). La configuración de una alianza sindical-estudiantil, la agitación en liceos (colegios secundarios) y universidades e incluso la resolución del conflicto –el acuerdo entre el primer ministro gaullista Pompadour y la CGT– parecen evocar los episodios del Mayo Francés. Mas allá de las diferencias –el robusto “modelo social francés” de los ’60 sobrevive hoy recortado y asediado por las políticas de la “Europa del capital”– lo cierto es que, en ambos casos, un motivo puntual permitió el desarrollo de una alternativa de resistencia a las políticas de ajuste.

Las variantes de la precariedad

El CPE constaba de una nueva modalidad de empleo para los jóvenes menores de 26 años, por la cual estos trabajadores estarían a prueba durante dos años, lapso en el cual el empleador podía despedirlos en cualquier momento sin justificación alguna y sin pagarles indemnización. Es importante señalar que el CPE estaba dirigido a empresas que empleasen más de 20 trabajadores –a diferencia de su “gemelo”, el CNE, del que enseguida hablaremos. A su vez, formaba parte de un “paquete” legislativo que lleva el irónico nombre de Ley de Igualdad de Oportunidades, promovido por el primer ministro a fines de 2005, inmediatamente después de los disturbios del último otoño, con epicentro en los suburbios de París. Además del CPE, la ley incluye otras modificaciones a las condiciones de empleo de trabajadores jóvenes, entre las que cabe citar la rebaja de 15 a 14 años de la categoría “trabajador aprendiz” y la legalidad del trabajo nocturno a partir de los 15 años. También introduce el llamado Contrato Senior, para

trabajadores de más de 57 años, un tipo de contratación sin estabilidad y que garantiza apenas el cobro del salario mínimo.

En Francia –como en la mayor parte de los países de la UE– coexisten varios tipos de contratos de trabajo considerados “precarios”. El más común es el Contrato de Duración Indeterminada (CDI), que se aplica en el sector privado, con una estabilidad adquirida a los dos meses, y que posee algunas ventajas, como la de poder conseguir un préstamo para la adquisición de una vivienda o un contrato de alquiler de un apartamento. Por otra parte, está el Contrato de Duración Determinada (CDD), que se caracteriza por su plazo de contratación de no más de seis meses. Existe también el trabajo por días u horas trabajadas, que se realiza a través de las empresas de trabajo temporal. Este último permite a los trabajadores ganar hasta un 30% más, por hora trabajada, que con un CDD o un CDI, si bien no se garantiza el trabajo todos los días del mes.

Para los jóvenes escolarizados, existe también el Contrato de Becario, en el que el salario es de 300 euros mensuales, sin ninguna estabilidad. Los trabajadores más jóvenes –desde los 15 años– y con escasa calificación suelen emplearse en los llamados Contratos de Aprendizaje, caracterizados por sus bajísimos sueldos. En Francia, donde la enseñanza es obligatoria hasta los 15 años, aquellos estudiantes que sigue estudios profesionales tienden a emplearse según esta modalidad hasta los 18 años, cuando consiguen un diploma técnico.

El caso más reciente de contrato precario es el llamado Contrato de Nuevo Empleo (CNE), destinado a empresas con menos de 20 trabajadores –dos tercios de las empresas francesas. El CNE, vigente desde agosto de 2005, establece para este tipo de empresas las mismas condiciones de contratación que las que el CPE prevé para las grandes empresas.

De acciones y reacciones

El destinatario de la medida explica, en parte, la enconada resistencia juvenil provocada por el intento gubernamental de imponer el CPE, a diferencia de lo ocurrido cuando se sancionó el CNE, que apenas motivó cierta resistencia sindical mal coordinada. Las grandes empresas emplean un número sustancialmente alto de personal técnico de mediana y alta calificación, formado en liceos, institutos técnicos y universidades, que constituyeron el núcleo original de la movilización.

El sesgo autoritario con que el primer ministro De Villepin pretendió imponer el CPE —una “demostración de fuerza” enmarcada en la lucha al interior del gobierno entre él y el ministro del Interior Nicolás Sarkozy—, contribuyó a deslegitimar la medida ante la población y a enervar a la oposición. De Villepin introdujo el CPE sin previa consulta con los sindicatos ni con su propia mayoría parlamentaria (12 de enero) y, en respuesta a la primera movilización masiva (7 de marzo), forzó la aprobación sin debate de la ley en la Asamblea (9 de marzo), mediante un “procedimiento de urgencia”, la enmienda 49.3.

A partir de la decisión del gobierno de imponer el CPE contra toda protesta, se estableció una dinámica caracterizada por la extensión de las bases sociales de la protesta y de las herramientas de lucha. Los sindicatos que habitualmente encabezaron las movilizaciones contra los embates neo-liberales, durante el período del anterior primer ministro Raffarin (CGT y FO), se sumaron a los estudiantes de universidades y liceos para convocar a una segunda movilización nacional (7 de marzo), en la que marcharon un millón de franceses. Dentro del campo estudiantil, se extendieron las ocupaciones de universidades: hacia fines de marzo, 67 de las 84 universidades nacionales se hallaban ocupadas por los estudiantes —entre ellas la Sorbona, ocupada por 300 estudiantes en la primera semana de marzo.

La teatral intransigencia del gobierno —al parecer dirigida a mostrar una falsa solidez al interior de la centroderecha, agitada desde hace meses por las carreras hacia la presidencia de Sarkozy y del propio De Villepin— no sólo ayudó a reforzar la unidad en el campo de la protesta; también privó al gobierno de aliados “naturales” (MEDEF, la corporación patronal; el ala “derecha” del Partido Socialista) e incluso erosionó aún más la unidad al interior del propio partido de gobierno. Luego de la tercera manifestación nacional (18 de marzo), el ministro del Interior comenzó a distanciarse abiertamente de la iniciativa: *“Esta situación ocurre por la falta de diálogo. Debe recuperarse el tiempo perdido, evaluar todo esto con las organizaciones sindicales y estudiantiles”*. En un anticipo de las actitudes que luego harían suyas la MEDEF, el Partido Socialista y la propia CGT, Sarkozy advertía del peligro del regreso de la violencia de fines de 2005: *“Existe el peligro de que esta efervescencia estudiantil despierte la agitación en los suburbios, que continúan muy tensos.”*

Nadie puede creer que las cosas se arreglaron en tres meses” (LF 23/03).

La presencia de los *casseurs* (“rompedores”) de los suburbios, en cada una de las movilizaciones, fue sistemáticamente explotada por el oficialismo y parte de los medios con el fin de sembrar miedo en la población. Descriptos como simples vándalos con el objetivo de saquear comercios y asaltar a los propios manifestantes, los *casseurs*, protagonistas de los disturbios del último otoño en los suburbios de las principales ciudades del país, se presentaban sin embargo con pancartas y stickers identificatorios —el más común era el de “Juventud basura”. Aunque por razones de espacio no podemos internarnos en esta problemática —oscurecida por los prejuicios que impregnan el relevamiento por parte de la prensa—, la emergencia de los *casseurs* promovió cierto consenso en el seno de la “Francia legal”. Así, luego de los desmanes del 28 de abril, la propia CGT —algunos de cuyos miembros habían entregado a los “agitadores” a la policía— pedía a Chirac que interviniera para evitar que el conflicto se volviera “inmanejable” (LF 29/04).

La aprobación de la ley en la Asamblea —otro intento de demostración de fuerza—, radicalizó aún más la protesta y aceleró la descomposición del gobierno. Los jueves y martes fueron declarados días de movilización; los jueves, exclusivos de los estudiantes y los martes, con participación de los sindicatos. Cada martes de marzo se realizó una movilización de mayor envergadura. Un dato significativo es que la oposición común al CPE se mantuvo, a despecho de las diferencias internas a nivel sindical —“setentistas” de la CGT, “reformistas” de la CFE-CGC— y estudiantil —una parte importante de los manifestantes anti-CPE se declaraban en contra de la toma de las universidades y de los cortes de ruta.

La huelga general del 28 marzo, convocada por la Intersindical —un colectivo conformado por 12 organizaciones, entre ellas las cinco grandes organizaciones sindicales (CGT, CFDT, FO, CFTC y CFE-CGC), la UNEF (universitarios), FIDL y UDL (liceos)—, paralizó al país, debido al alto acatamiento en el transporte (30%). El nivel de adhesión fue aún mayor en educación (50%) y, por primera vez, los grandes sindicatos lograron un importante acatamiento en ramas como la industria química, metalúrgica y bancaria. Por primera vez, se pidió abiertamente la renuncia del primer ministro.

Cada nueva demostración de fuerza del gobierno —entre las que cabe señalar la intervención de la policía antimotines (CRS) y la detención de centenares de manifestantes en cada gran movilización— obtuvo como respuesta un desafío mayor. A la validación de la ley por parte del Consejo Constitucional (30 de marzo), correspondió la introducción de la modalidad del piquete en rutas y vías férreas, que llegó a afectar, a prin-

cipios de abril, a 350 kilómetros de vías de comunicación. A la promulgación de la ley por parte de Chirac (31 de marzo), respondió la Intersindical con un nuevo llamado a la huelga nacional y un ultimátum que, por primera vez, incluía la posibilidad de renuncia del propio presidente.

La huelga nacional del 4 de marzo –en el curso de la cual se movilizarían tres millones de personas– aceleró la descomposición del elenco de gobierno. Mientras se extendían los piquetes y las tomas de universidades y el UDF –partido de centro-derecha que forma parte de la alianza de gobierno– pedía la renuncia de Chirac, se elaboraba en el Senado un proyecto alternativo “de consenso” entre los legisladores del gobernante UMP y los sindicatos. Luego de un episodio grotesco, en el cual De Villepin desairó a sus propios cuadros, rechazando el proyecto que habían elaborado, Chirac anunció (10 de marzo) la eliminación del CPE y su sustitución por un artículo en el que se establecen ayudas a toda empresa que emplee jóvenes de 16 a 25 años mediante contratos CDI.

El saldo político del conflicto es el inevitable ocaso del “chiraquismo” –de su candidato, De Villepin– y la posible articulación de sindicatos y organizaciones estudiantiles en una fuerza capaz de obstaculizar ulteriores reformas de corte neoliberal. De hecho, la Intersindical ya ha anunciado que se mantiene en pie su demanda de eliminación del CDE y de la propia “Ley de Igualdad...”. Sin embargo, de acuerdo a las encuestas, las próximas elecciones presidenciales –a realizarse dentro de un año– tienen como principales candidatos a dos partidarios del modelo anglosajón de contratación: el presidente del UMP, Nicolás Sarkozy y la socialista Segolene Royal, confesa admiradora de la “tercera vía” de Tony Blair.

La Europa de los “contratos basura”

El intento del gobierno francés por imponer distintas modalidades de contratación en condiciones precarias se inscribe en una tendencia dentro del espacio europeo a favor de la “flexibilización” de las reglas sobre el despido. Y, a su vez, esta tendencia responde a una estrategia diseñada en los ’90 y cuya formulación más clara la encontramos en los documentos de la Cumbre de Lisboa (2000). En Lisboa, se estableció el objetivo de transformar al bloque de la UE en la “economía más competitiva” para 2010. Los tres pivotes que sustentaban esta meta –aumento del empleo, reducción del déficit fiscal e incremento de la inversión– a su vez se consideraron condicionados por la aplicación de medidas tales como la reducción de las cargas sociales y los costos laborales y la privatización de los servicios públicos. Puntualmente, con respecto al empleo juvenil, el documento final de la Cumbre establecía como uno de sus objetivos “favorecer la disponibilidad y adaptabilidad de los jóvenes a las necesidades de la empresa”.

Ante la ausencia de una reglamentación europea que regule la cuestión del trabajo, la introducción de “contratos basura” corrió por cuenta de gobiernos tanto de “derecha” como de “izquierda”. Como en el caso del primer ministro Balladour en 1995 –con su intento de imponer la “modernización” de la ley del salario mínimo– y en el del actual presidente Chirac, los costos políticos fueron pagados por el personal de turno.

En Reino Unido, rige desde octubre de 2004 un sistema en el cual la baja de la actividad de la empresa justifica los despidos colectivos. Se estableció también un tope de 12.000 euros en concepto de indemnización (55.000 para despidos abusivos). En Bélgica, rigen los llamados Contratos PTP para jóvenes, en los cuales el período de prueba va de dos semanas (obreros) a 6 meses (empleados). Se estableció un tope de seis sueldos para las indemnizaciones, y sólo para casos de despido abusivo.

En Suecia, el parlamento debate en estos días una proposición semejante a la del CPE, presentada por el Partido de Centro. En Alemania, la gran coalición (cristianodemócratas y socialistas) también se propone cambiar el Código del Trabajo e introducir un período de prueba de dos años para todos los asalariados. Es una iniciativa semejante a la del Contrato Único, que el primer ministro francés se proponía enviar a la Asamblea a principios de junio.

España constituye una suerte de “niño modelo” para los estrategias de Lisboa: el 40% de la mano de obra está en contratos temporarios (CDD), en especial los jóvenes. Los CDD predominan en agricultura, comercio, hotelería y administración pública. En el caso de los contratos de duración indeterminada, el período de prueba se extendió de dos a seis meses. Este tipo de contratos varían según la segmentación del mercado laboral: para las categorías de mayor calificación, la indemnización equivale a 45 días por año trabajado; para las de menos calificación, a 30 días.

En Italia, hay todo un arsenal de tipos “especiales” de contratación, introducidos durante la gestión “social-demócrata” de Romano Prodi (1996-1998) y ampliados por la llamada Ley Biaggi de 2003. En general, estos contratos pueden caducar en cualquier momento a voluntad del empleador. En 2005, este tipo de contrato representó el 70% de los nuevos empleos. Sin embargo, los CDI todavía son mayoría y, en su caso, el “derecho al despido” por parte del empleador sigue siendo estrecho: las empresas de más de 15 empleados deben reintegrar a todo empleado despedido sin justificación. Esto es resultado de las movilizaciones en Roma en 2003, que obligaron a “congelar” el artículo 18 de la ley Biaggi.

El desgaste del actual gobierno francés –e incluso, su obstinada torpeza para gestionar el ajuste–obligaron a la “comunidad de negocios” y a la prensa europea, que oficia como su vocera, a deslindarse por razones tácti-

cas de una medida, sin embargo, enmarcada dentro de sus necesidades estratégicas. El crecimiento de la movilización y, ante todo, el temor a que la agitación estudiantil y sindical se articulara con la de los inmigrantes de los suburbios, obligó a la principal patronal francesa (MEDEF) a solicitar al primer ministro que desistiese de imponer el CPE: *“Los hechos actuales ponen en peligro nuestra economía, la imagen de Francia y la solidez del tejido social”* (L. Parisot, presidente del MEDEF, en LF 25/03). Sin embargo, no se logró ocultar el sentimiento de derrota experimentado por los empresarios luego de la derogación del CPE por parte de Chirac: *“Con victorias como ésta, todos perdemos”* (el mismo Parisot, BBC 11/04).

La “prensa de negocios” no oculta su preocupación por la emergencia de un consenso contra las reformas neoliberales: *“Tras la trombosis social, tras el crash cívico de 2002, tras la jacquerie electoral de mayo (el no francés a la Constitución de la Unión Europea), las revueltas urbanas del otoño de 2005 son una nueva ilustración de la crisis nacional de Francia y de la descomposición de su cuerpo social”* (Le Point 23/03). Otro tópico fue la descalificación de las organizaciones sindicales: *“La CGT ha perdido dos tercios de sus miembros desde 1970 (...) ¿Cómo hacen los sindicatos franceses para tener tanto poder? Una de sus fuentes es la simpatía pública. Figuras como Thibault (secretario general de la CGT) gozan de un status snob de revolucionarios (...) Pero la CGT no representa más que a una minoría de los trabajadores franceses”* (IE 27/04). Incluso se incita a los franceses a seguir el ejemplo de los países de Europa Oriental: *“En Budapest, los húngaros no comprenden por qué los franceses toman las calles para protestar por el CPE. ¿Qué les pasa a los franceses, por qué protestan?, se interroga Peter, un joven de Budapest que acumula dos, y a veces tres empleos (...) Sin reforma, sin flexibilización laboral, Francia va a jugar pronto en segunda división, afirma la checa Jana Martinova, consultora de recursos humanos (...) En Eslovaquia, el primer ministro Dzurinda hizo campaña para las legislativas prometiendo ‘Vamos a tener el coraje de hacer las reformas que sean necesarias’. La prensa eslovaca se despacha contra la Francia ‘timorata’, ‘esclerótica’ y ‘perezosa”* (LM 7/04).

La excusa del desempleo

Los gobiernos europeos de turno enarbolan la bandera de la “lucha contra el desempleo” para intentar dotar

de cierto consenso estas iniciativas, aunque con decreciente eficacia, según se desprende del reciente fracaso de los demócrata-cristianos alemanes en su intento de convertirse en el único partido de gobierno (ver *Análisis* N° 66) y en el marasmo en que se encuentra el gobierno francés actualmente.

En Francia, la Ley de Igualdad de Oportunidades fue presentada por el primer ministro como una respuesta a la explosión de ira del pasado mes de noviembre en los barrios periféricos de las grandes ciudades. Se argumentaba que daba respuesta a la juventud desempleada (23% sobre una media total del 9,9%) y, en especial, a los jóvenes con baja calificación laboral que no encuentran empleo (40%) (LM 30/03). Debe hacerse notar, sin embargo, que dos tercios de los jóvenes empleados ya lo hacen en contratos de duración determinada, lo que contradice la retórica que formula una relación directa entre flexibilización de las condiciones de contratación y aumento del empleo.

Y es que el alto desempleo francés no deriva de una caída del ciclo económico. Como la mayor parte de los países de Europa, se estabilizó entre un 8 y un 10% a principios de los '90, sin cambios apreciables en momentos de auge y virtual recesión. De hecho, las grandes empresas francesas atraviesan por un período de sorprendente aumento de sus beneficios: en 2005, las 40 empresas francesas más grandes obtuvieron un lucro neto de 84.000 millones de euros (más de 100.000 millones de dólares) —lo que representa una marca histórica— y el 50% de incremento respecto a 2004. The Economist informa que las grandes empresas francesas fueron las que más crecieron en el mundo el año anterior, hecho que se deriva de la “reestructuración productiva” operada por el anterior primer ministro, Raffarin, que logró rebajar los aportes patronales, aumentar la edad de jubilación y recortar los fondos para salud y educación (LM 16/03). La rebaja de los costos laborales, efectivamente, parece reflejarse en los márgenes de rentabilidad empresarial; pero el aumento de esta última —contradiciendo la retórica oficial— no impulsa el empleo.

El problema de la inmigración ilegal en EE.UU.

El surgimiento de EE.UU. como nación, y su posterior crecimiento, estuvo sustentado en oleadas inmigratorias que poblaron su vasto territorio. Sea por la inmigración “voluntaria” desde Europa —y luego Asia y América Latina— como por la forzada desde África, destinada a proveer mano de obra esclava a las haciendas del sur del país, la sociedad se enfrentó desde sus albores con la problemática de la integración de los nuevos contingentes de población. Esto hizo de la inmigración una cuestión permanente en la agenda política, generando en los principales partidos políticos, y en sus líneas in-

ternas, arraigadas concepciones sobre el tema. Con frecuencia, los demócratas aparecen con una política más permisiva que los republicanos. Sin embargo, una distinción como ésta es insuficiente para entender la dinámica política. Para ello, intentaremos realizar una descripción de la coyuntura actual, teniendo en cuenta que desde fines del año pasado el tema ocupa el centro de la opinión pública.

Apertura: defenderse atacando (a los peones primero)

La última modificación a la política inmigratoria, allá por 1986, y las discusiones parlamentarias actuales para volver a hacerlo, coinciden en que ambas acontecen en gobiernos republicanos. Entre ambos momentos se desarrollaron transformaciones de tal magnitud, que dicha coincidencia sólo indica la importancia que tiene el tema en la ideología conservadora, fundamentalmente en la línea interna representada por Reagan y Bush. A su vez, la distancia entre la calidad de los cambios –tanto por su velocidad como por su extensión– y la relativa ausencia de políticas integrales hacia la inmigración –desde la ley de Control y Reforma de la Inmigración (*Immigration Reform and Control Act*) de 1986 hasta la actualidad– son indicativos de una postura demócrata de *laissez faire* alrededor del tema. Durante el gobierno de Clinton, el disfrute de una fase ascendente del ciclo económico permitió utilizar una perspectiva basada en medidas prácticas coyunturales, evitando el proceso de discusión y elaboración de un plan integral, que por el momento aparecía como innecesario.

La vocación republicana de tratar el problema de la inmigración y de buscar una solución integral no se hizo presente durante el primer mandato de George W. Bush. Recién en el tradicional discurso de asunción del segundo mandato, en febrero de 2005, el asunto saltó al rango de prioridad. Hubo que esperar hasta fin de año para que el Congreso pudiese materializar dicha preocupación, una vez que pudo resolver espinosas cuestiones presupuestarias y tributarias. Fue en la cámara baja (Representantes) donde comenzó a gestarse el convulsionado escenario actual. Allí, se aprobó por 239 votos a favor (203 republicanos y 36 demócratas) y 182 en contra (164 demócratas, 17 republicanos y 1 independiente) el proyecto del representante republicano por Winsconsin F. James Sensenbrenner Jr., a su vez presidente del Comité Judicial de la cámara (WP 17/12/05). En resumidas cuentas, el proyecto de ley constituía una política integral hacia la inmigración centrada en consideraciones de seguridad. El mismo supone la construcción de una muralla en el límite con México, el incremento de los efectivos destinados al control fronterizo y su actualización tecnológica. Del mismo modo, en el aspecto judicial, se enfatiza en los aspectos represivos: la deportación será inmediata y sin necesidad de intervención judicial. Inclusive, aquellos familiares o personas que ayuden a inmigrantes ilegales serán pasibles de una condena de cinco años de prisión. Por su parte, los empleadores deberán verificar las identidades de los trabajadores que contratan, so pena de sufrir fuertes multas.

Como era de esperarse, este proyecto inmediatamente levantó una airada oposición entre las minorías (latina, asiática, negra, etc.). Pero también, importantes organizaciones de la burguesía se mostraron en

oposición. R. Bruce Josten, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, “*expresó su desilusión porque no contempla ningún programa para trabajadores temporarios y agregó que la provisión que obliga a los empleadores a realizar la verificación de la identidad de los trabajadores es poco realista*” (WP 11/12/05). Claramente, la ausencia de propuestas positivas para responder a las necesidades de numerosas ramas y fracciones de la burguesía restó apoyo a la medida. Este aspecto quedó muy claro para los senadores, que debían elaborar un proyecto propio. Una vez aprobado éste, el paso siguiente supone elaborar la síntesis de los dos proyectos en las comisiones pertinentes, para que luego ese proyecto unificado sea aprobado nuevamente por ambas cámaras.

En el Senado, las complicaciones para llegar a un acuerdo se incrementaron simultáneamente con la agitación de la opinión pública. El primer proyecto presentado fue el demócrata, impulsado por el senador de Massachussets Edward M. Kennedy, que fue rechazado en una votación predecible, más aún cuando le retiró su apoyo el sector republicano encabezado por el senador de Arizona John McCain. Se trataba prácticamente de una amnistía para los inmigrantes –idéntica, en este punto, a la ley sancionada durante la presidencia de Reagan en 1986– y una simplificación de los trámites para su legalización. Su fracaso dejó el camino allanado para el proyecto consensuado al interior del bloque de senadores republicanos.

La iniciativa impulsada por los senadores republicanos Mel Martinez por Florida y Chuck Hagel por Nebraska coincidía con el demócrata en algunos puntos muy importantes, en cuanto a la instrumentación del proceso de legalización, pero sepultaba cualquier forma de amnistía irrestricta. El eje central de la iniciativa es la fragmentación de los inmigrantes en tres: el primer grupo, integrado por aquellos con más de cinco años en el país, el segundo con inmigrantes ingresados al país entre 2000 y 2004, y por último los que residen desde hace dos años o menos. Para cada uno de ellos, proponen diferentes medidas. El primer grupo dispone de la posibilidad de legalizar su situación sin irse del país. Para el segundo, se prevé un traslado a cualquiera de los 16 puertos de entrada, donde podrán solicitar visas temporales para empleos de baja cualificación. Los que integran el tercero serán deportados a sus países de origen, donde también podrán solicitar visas temporales. Obviamente, el otorgamiento de los nuevos permisos quedará sometido a la voluntad –como expresión de las necesidades de las distintas ramas productivas– del gobierno, que a partir de ello actuará como mecanismo regulador –hasta el momento en manos exclusivas del mercado de trabajo, muy desatomizado regionalmente debido a la diversidad de necesidades de las distintas ramas productivas que se asientan en cada una de ellas. Las coincidencias sobre la instrumentación son prácticamente unánimes: verificación de antecedentes pena-

les, pago de impuestos, registrarse para el servicio militar selectivo, demostrar conocimiento de inglés y de la historia del país, abonar una multa de 2.000 dólares adicionales a los gastos del trámite y trabajar con visado temporal por un período determinado de tiempo (las propuestas van de los 6 a los 11 años).

El Senado parecía encaminarse hacia una solución negociada, cuando el movimiento irrumpió en la escena con un vigor y una energía sorprendentes, hasta para sus fracciones más organizadas y conscientes. Al compás de lo que acaecía en el Senado, las minorías, principalmente la latina –tanto por su número como por su disposición–, comenzaban a organizarse.

Las marchas y manifestaciones comenzaron a extenderse a partir de mediados de marzo. Con el correr de los días, crecieron en número, alcanzando su punto máximo el 10/4, que se transformó en el Día Nacional de Acción por la Justicia Inmigratoria. Las manifestaciones alcanzaron las 500.000 personas en Los Ángeles y Dallas, 300.000 en Chicago y entre 100.000 y 300.000 en Washington. Se estima que en 90 ciudades se registraron acciones. Entre la población “blanca” (nativa o de inmigración europea) se verifica un alto grado de apoyo en general: “Según una encuesta de *Washington Post* y *ABC News*, un 63% de la población apoya que se permita a los inmigrantes, que vivieron cierta cantidad de años en el país, transformarse en ciudadanos. Se rebate el argumento de que los inmigrantes quitan el trabajo a los nativos: un 68% manifiesta que trabajan en empleos que los propios americanos rechazan” (WP 11/04). Esto permitió que el movimiento se desarrollase sin las trabas que supondría un rechazo de la opinión pública –principalmente el grueso de aquella que participa en elecciones.

No obstante ello, el movimiento comenzaría a perder su unidad, reafirmando al gobierno en el camino elegido al abordar la cuestión. Dicha fragmentación se originó en relación con las medidas que debía seguir el movimiento a partir de ese momento: una parte llamó a un boicot nacional –huelga y desobediencia civil, esto es, no mandar a los hijos al colegio, abstención de consumo, etc.– y la otra rechazó la medida, aduciendo la necesidad de esperar que las acciones rindan sus frutos, esto es, que el Congreso contemple sus reclamos en la reforma.

Medio juego: buscar la ventaja

Luego de hacerse patente la imposibilidad de una solución negociada, el Senado entró en el receso de primavera tradicional del Memorial Day. El presidente Bush –que permanentemente se mostró inclinado a mantener a toda costa su prescindencia del tema– no tuvo más remedio que realizar una reunión con los senadores más proclives a una solución negociada: los republicanos Frist, Specter, McCain, Martínez, Graham y McConnell (el único no involucrado en el acuerdo tentativo) y los demócratas Reid, Kennedy, Menéndez y

Lieberman (WP 25/04). Todo un símbolo de la firmeza con que las distintas fracciones defienden sus intereses, al punto de desbordar los marcos federales en que el tema debe tratarse: “*La Conferencia Nacional de Legislaturas Estaduales registró 463 leyes sobre inmigración introducidas en 43 estados este año, de lejos la mayor cantidad de propuestas en un año realizadas en la historia sobre el tema. Arizona promueve penalidades para los empleadores, la construcción de un muro en el límite con México y la compra de un radar de última generación para reducir el paso nocturno de mexicanos. Georgia, Ohio y South Dakota tienen proyectos similares pendientes. Pero por otro lado, algunos estados se mueven en otra dirección. En abril, la legislatura de Nebraska hizo caso omiso del veto del gobernador a una medida que ofrece becas para colegios estatales para hijos de inmigrantes ilegales. Otros nueve estados autorizaron medidas similares y muchas universidades públicas estatales emplean la política ‘no preguntar, no decir’*” (WP 3/05). Dicha diversidad también se manifestó con claridad en las acciones políticas directas de las autoridades: el ejemplo más contundente fue el estado de Florida, gobernada por el hermano menor del presidente, Jeb Bush, que inició un proceso de detenciones y redadas. Al parecer, esta fue la expresión más decidida de una táctica originada en la misma Casa Blanca: tensar la cuerda hasta el límite, pero sin romperla. La intención es incrementar las posibilidades de éxito de la estrategia general, que introduciremos más adelante.

Ciertamente, esta actitud no es nueva. De hecho, “*el gobierno pudo mostrar el año pasado como un golpe a la inmigración ilegal. Mediante un gasto billonario en captura, detención y procesamiento, destinando millones de horas de trabajo e impulsando un cambio de política, los agentes federales deportaron un récord de 200.000 ilegales. Aún así, con 28.000 camas disponibles, el Departamento de Seguridad Interna no puede contener a los detenidos. Por ello, es rutina que los liberen. Pero como México acepta sólo a los suyos, la mayoría permanece en el país. China, por ejemplo, se niega a recibirlos de vuelta. Por ello, cerca de 39.000 inmigrantes ilegales chinos viven en EE.UU. pese a que tienen órdenes de ser deportados*” (GE 17/04).

Este divorcio entre la capacidad y los deseos llevó a una extensión de las medidas, muchas de ellas aplicadas sin discreción. Un foco de ataque lo constituyó la salud. Constituyendo el ítem de mayor crecimiento porcentual dentro del presupuesto, resultó un objetivo previsible. Quizás lo que no fue contemplado fueron los efectos de las medidas. “*Más de 50 millones de beneficiarios del programa Medicaid tendrán que disponer de certificados de nacimiento, pasaportes u otros documentos que prueben que son ciudadanos norteamericanos, y todos los que busquen recibir el beneficio tendrán que hacerlo después del 30 de junio. Se busca detener ‘el robo de los beneficios de Medicaid por parte de los extranjeros ilegales’, de acuerdo a las palabras del representante republicano por Georgia, Charlie Norwood, el impulsor de la medida promulgada por Bush el 8 de febrero de este año. El representante demócrata por ese estado, John Lewis manifestó que ‘muchos ancianos americanos no tienen certificados porque sus*

padres no tuvieron acceso a hospitales y fueron paridos en sus casas. En el último siglo, por todo el sur del país, muchos hospitales no aceptaban a las minorías por la segregación y discriminación racial'. Mientras que la directora de Medicaid agregó que 'hay muchas razones por las cuales la gente no tiene copias de sus partidas de nacimiento. Mucha gente de 80 y 90 años tampoco tienen licencia de conducir ni pasaporte' (NYT 16/04). La ausencia de un documento de identidad a nivel nacional en EE.UU. podría ser subsanado con otros que acrediten identidad, pero aquí también el gobierno incrementó la presión, tal como confesó un argentino sin papeles de Miami: "El único problema es que cada vez es más difícil renovar el permiso de conducir. Cuando yo llegué uno podía obtener un permiso por siete años diciendo que los demás documentos estaban siendo tramitados. Pero ahora sólo lo dan por un año y cada vez es más engorroso renovarlo. Sin permiso de conducir, uno aquí no es nadie" (C 7/04).

De ser insuficiente con estas medidas, el gobierno federal ya lanzó otra iniciativa que se encuentra pendiente de aprobación. El proyecto de ley denominado Real ID Act, tiene menores chances de ser promulgado pues "New Hampshire lanzó una iniciativa en contra, que lo transforma en el primer estado en rechazar el proyecto, aduciendo cuestiones financieras y constitucionales acerca de su implementación" (GE 17/04). Se topa con la habitual y permanente oposición de la sociedad norteamericana a la existencia de un documento de identidad. No obstante ello, es indicativo de la tendencia general hacia un incremento del control social.

La decisión del gobierno de enviar una señal clara y contundente a la opinión pública lo obligó a realizar acciones contra los empleadores. En el operativo más resonante, "en IFCO Systems North America, la empresa holandesa, que es la mayor compañía de logística de EE.UU., fueron arrestados 7 directivos (actuales y retirados) bajo los cargos de conspiración para transportar, albergar y promover la inmigración ilegal. El Departamento de Seguridad Interna capturó 1.200 inmigrantes ilegales en la operación" (GE 20/04). El tufillo que emana de esta operación, teniendo además en cuenta que se trata de una empresa extranjera, lo denunció "Don Sherman, director de Cincinnati Interfaith Committee for Worker Justice, una ONG que defiende a los inmigrantes, quien expresó con escepticismo que 'la oportunidad es muy sospechosa, porque justo fue realizado en un momento en que existen masivas manifestaciones en favor de la reforma migratoria'" (WP 21/04/06). En un intento por desprender el hecho de toda intencionalidad política, el titular del Departamento de Seguridad Interna Michael Chertoff, no hizo más que confirmarla afirmando que las investigaciones "llevan más de un año" (WP 21/04). De hecho, es *vox populi* la connivencia entre los empleadores y el gobierno. "En un documento estratégico de 1999, el Servicio de Naturalización e Inmigración (INS, por sus siglas en inglés) colocó al control en el lugar de trabajo en el último lugar de sus prioridades. Hoy, el Buró de Control de Inmigración y Aduanas, que reemplazó al INS y es una sección del Departa-

mento de Seguridad Interna, creado en 2003, destina un 4% de su personal para dicha tarea, comparado con un 9% en 1999. Desde 1997, las autoridades inmigratorias y de seguridad social lanzaron un programa piloto voluntario para chequear la documentación de los postulantes a empleo: sólo 2.300 entre los más de 6 millones de empleadores lo implementaron" (NYT 5/03).

Todas estas medidas tuvieron su efecto sobre el movimiento. Si bien no se puede hablar de fractura, porque el nivel de organización del conjunto es muy heterogéneo, principalmente por su carácter regional, su corolario es la fragmentación. "Algunos grupos expresaron entusiasmo por las acciones programadas para el 1° de mayo que paralizarán restaurantes, hoteles, plantas de empaque y obras en construcción. Pero otros cuestionaron el valor estratégico de hacerlo" (WP 14/04). No obstante ello, el éxito de la jornada de boicot y huelga del 1° de mayo demostró que una parte numéricamente importante, y con mayor grado de decisión, no da tregua al gobierno.

La fecha escogida es significativa, pues en EE.UU. el día del trabajo (Labor Day), además de no ser del Trabajador, se festeja el primer lunes de septiembre de cada año. Las manifestaciones lograron, especialmente en Los Ángeles, Chicago y New York, similar o inclusive mayor masividad que las anteriores. Pese a que en las últimas no se contó con la capacidad movilizadora de una organización siempre "cerca de los pobres": "Una de las instituciones más poderosas detrás de las manifestaciones fue la Iglesia Católica. 70 de las 197 diócesis se comprometieron formalmente a la campaña por la inmigración desde que la Conferencia de Obispos Norteamericanos comenzó con sus esfuerzos el año pasado" (NYT 27/03). Escogiendo cuidadosamente sus palabras, fue el mismísimo "Cardenal Roger Mahony de Los Angeles quien se pronunció en contra del boicot, afirmando que 'personalmente, creo que podemos hacer del 1° de mayo un día en que todos ganemos aquí en el Sur de California: ir a trabajar, ir al colegio y después sumarse a los miles que seremos en las manifestaciones'" (NYT 20/04).

En rigor, más que la fragmentación, lo que este segundo momento de la lucha evidenció son las dificultades que enfrenta el movimiento para enfrentarse unido al problema. De hecho, el movimiento se organiza para dar la pelea sobre una base muy disímil: la profunda segmentación del mercado de trabajo norteamericano es el punto clave en que opera la burguesía a través de los funcionarios del gobierno y el estado. Inclusive, importantes fracciones imitan sus métodos para alcanzar sus intereses particulares: "En cuatro meses, la organización Immigration Voice, que agrupa extranjeros de alta calificación que esperan su tarjeta verde (permiso de trabajo permanente), llegó a 3.000 miembros, recaudó 200.000 dólares y contrató a una poderosa firma de lobby, Quinn Gillespie & Associates LLC. La mayor parte llegó de India, y de manera creciente de China, con una visa de estudiante o una temporaria H-1B, reservada para trabajadores altamente calificados y con la cual pueden residir por seis años en el país" (WP 26/04).

Final: cuando hay menos piezas se ve más claro.

“*Estamos aquí para defender los valores americanos. América se construyó por inmigrantes*” (NYT 10/04), repetía hasta las lágrimas, en un fluido castellano, un manifestante. Frases distintas pero con el mismo contenido inundaban cada una de las manifestaciones. Es indudable que el destinatario del reclamo es el Congreso y su contenido la regularización de la situación de los inmigrantes. Ni más ni menos que su incorporación plena para poder disfrutar del “sueño americano”.

Es ostensible considerar que el gobierno republicano responderá a esa demanda, lo que resta conocer son los términos de la solución. Esto mostrará el equilibrio alcanzado en las negociaciones entre las diferentes fracciones de la burguesía, tanto en su recorte regional como por rama o sector. La paciencia con que el gobierno parece desenvolverse en el tema es quizás una forma de incrementar la tensión para luego cosechar el mayor rédito político posible. Más aún teniendo en cuenta que los índices de aprobación de la gestión de Bush alcanzan su mínimo histórico –38% a menos de 7 meses de las elecciones legislativas– mientras que un 60% desapruueba su trabajo (WP 10/04). De hecho, el peso político de las minorías –por el crecimiento de su proporción sobre el total– las convierte en un sector decisivo para el disfrute del dominio de los resortes del gobierno, para cualquiera de las facciones. Ambos partidos tomaron nota hace ya tiempo de esta circunstancia, como también lo hicieron los propios manifestantes, que el día del boicot realizaron un registro masivo de electores (NYT 20/04/06). Partiendo de la base de que es obligatorio registrarse para votar en EE.UU. y que en la elección del 2004 los latinos constituían sólo el 6% del electorado (NYT 10/04/06), la perspectiva de perder terreno ante la facción rival en dicha franja incrementa el ansia de dar respuesta a este sector.

Esta mutua necesidad brinda un marco que hace posible una “solución”. Pero el agregado de que una de las partes de ese vínculo, los inmigrantes, se encuentra en una situación desesperada; permite que la iniciativa de esta partida continúe en manos del conjunto de la burguesía que, con sus diferencias internas, posee una estrategia para enfrentar el problema. Curiosamente, en consideraciones tácticas podemos observarla, circunstancia que podría parecer poco habitual. Observemos para ello los acuerdos generales sobre los requisitos de la reforma:

Servicio militar obligatorio selectivo: la incorporación de efectivos para las fuerzas armadas continúa debajo de las expectativas y de las necesidades. En el último año fiscal, finalizado el 30 de septiembre de 2005, se consiguieron reclutar 73.300 nuevos efectivos, 1.000

menos que el promedio de los últimos 10 años y muy por debajo de los 80.000 necesarios para cumplir con los objetivos de expansión: llevar a las tropas de 315.000 actuales a 355.000. Estos resultados demuestran el escaso éxito de la parafernalia de medidas implementadas para cubrir la brecha: la retención de efectivos (reenlistamiento), el aumento de la cantidad de reclutadores de 9.000 a 12.000 y el incremento de la publicidad en 130 millones de dólares. La guerra de Irak, la resistencia de los padres y el bajo nivel de desempleo actual son las causas de esta merma en los potenciales candidatos. Por ello, el Pentágono redobla sus esfuerzos y presiona al Congreso para que, entre otras medidas, se duplique el bono por enlistarse (de 20.000 a 40.000 dólares) y, lo más notable, se disminuyan los estándares mínimos para calificar como soldado (WP 4/10/2005). Estos datos fueron confirmados por un reporte del órgano de auditoría del Congreso, la General Accountability Office, en el cuál se verifica que 5 de los 10 componentes de las fuerzas armadas (Ejército, Reserva del Ejército, Guardia Nacional Terrestre, Guardia Nacional Aérea y Reserva de la Marina) fallaron en sus objetivos de reclutamiento entre un 8% y un 20% (GAO-06-134 Report 17/11/2005). Esta masa de nuevos ciudadanos engrosaría los potenciales candidatos para, en caso necesario, entrar a sangre y fuego en Irán.

Déficit fiscal: si los inmigrantes que se legalizan alcanzan los 4.000.000, multiplicando esa cifra solamente por la multa que se planea cobrar (2.000 dólares), da un monto de 8.000 millones de dólares, una importante contribución para las maltrechas arcas del gobierno. Considerando que además existirán otros gastos y seguramente pesados impuestos, es razonable pensar que financiarán los próximos y habituales recortes impositivos para la franja más pudiente de la sociedad.

Productividad: por primera vez desde que se llevan las estadísticas en 1996, el desempleo entre inmigrantes en 2005 es menor que entre nativos: 4,6% contra 5,2%. Si bien es cierto que podemos observar cierto oportunismo en las cifras, ello no quita que para ciertas tareas la fuerza de trabajo precarizada que conforman los inmigrantes es esencial. Como también lo es por su efecto sobre el conjunto de los salarios: “Según George J. Borjas, de la Universidad de Harvard, desde 1980 a 2000, la inmigración redujo el promedio de los salarios en un 7,4%” (WP 15/04).

Pareciera que, sea como mano de obra barata (y abaratadora), como contribuyentes al alicaído fisco, o como infantes del ejército, la burguesía estadounidense calcula cómo los inmigrantes hoy ilegales podrían aportar algo más que el trabajo que aportan actualmente.

América Latina

El conflicto por los mercados y el accionar de las diferentes burguesías latinoamericanas pusieron sobre la mesa las contradicciones en los diferentes bloques regionales que veníamos observando en los últimos meses. El NAFTA, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercosur están siendo sistemáticamente cuestionados (y con retiros incluidos) por las burguesías más débiles de los bloques o por las disputas entre cada uno de los países que lo conforman.

De esta manera, tanto Uruguay como Paraguay empiezan nuevamente a levantar la voz por las asimetrías y las dificultades de inserción de sus productos dentro del Mercosur, apoyados en esta oportunidad por Venezuela, que busca, en la medida de sus posibilidades, otro tipo de integración. De esta forma parece perfilarse un nuevo papel de Venezuela como mediador entre los

más chicos y los más grandes (Brasil y Argentina) dentro del Mercosur.

Por su parte, la firma de los tratados de Libre Comercio entre Perú y Colombia con EE.UU. generó la denuncia y salida de Venezuela de la CAN, así como las enérgicas protestas de Bolivia. De esta forma, Venezuela sigue girando hacia el Mercosur -aunque no por eso sin críticas a su funcionamiento.

Por último, dentro del NAFTA (México, EE.UU. y Canadá) el problema de la seguridad fronteriza e inmigratoria vuelve a cobrar importancia, debido no sólo al avance de leyes inmigratorias en EE.UU. sino también a las movilizaciones de hispanos en contra de las medidas que intentan endurecer las leyes contra los indocumentados en este país.

Pelea por las ganancias

Uruguay y Paraguay en el Mercosur: entre gasoducto, las papeleras y los EE.UU.

Los desequilibrios latentes se hicieron presentes

Tanto la cumbre por el acuerdo del gasoducto entre Paraguay, Bolivia y Uruguay con ayuda de Venezuela, como el conflicto por la instalación de las papeleras entre Argentina y Uruguay, pusieron sobre el tapete al interior del Mercosur los problemas que estaban latentes. La utilización de ambas instancias por parte de los países más chicos del bloque para hablar de las asimetrías al interior del mismo hizo estallar la problemática de los desequilibrios entre el tandem Argentina y Brasil, por un lado, vs. Paraguay y Uruguay, por el otro.

En el último año y medio, en esta publicación hemos hecho hincapié sobre el proceso de afirmación del bloque regional ante la imposibilidad de establecer el ALCA por parte de EE.UU. El famoso "4+1" de la *Cumbre de las Américas* de Mar del Plata el año anterior fue una demostración de eso. Esa afirmación no estuvo ni está exenta de contradicciones, en la medida que sus burguesías llevan adelante el proceso de integración, tal como las que expresan sus dos principales socios, Argentina y Brasil, en razón de sus desacuerdos bilaterales macroeconómicos que imposibilitan avanzar en la integración económica y, a la vez, política y social que muchas veces se ha enunciado en los momentos *cumbres* de oposición al ALCA.

Otro ejemplo contradictorio es el ingreso al bloque de ese "quinto elemento", Venezuela. Integración que llevará varios años para llegar a los términos ideales que Caracas pretende, justamente también por la asimetría entre las economías de sus integrantes, más que nada en materia de recursos energéticos. Además, se suma a esto que la oposición al ALCA de Venezuela no se manifiesta en la misma dirección que la del resto de los integrantes del Mercosur.

Por el lado de los más chicos siempre estuvo latente la expresión abierta de su incómoda situación. Ya en la última cumbre del bloque realizada en diciembre anterior, se mencionó la necesidad de equilibrar las fuerzas y las

decisiones entre todos los integrantes. Pero lo cierto es que la actividad económica, los recursos, la productividad y el peso de los capitales de Uruguay y Paraguay, evidentemente no son lo mismo que los de sus socios mayores. Adjuntamos algunas diferencias básicas pero sustanciales para pensar en términos de mercados el lugar que ocupan los integrantes originales del Mercosur. Para ver las asimetrías de Paraguay y Uruguay con Argentina y Brasil, y también entre estos dos últimos.

	Brasil	Argentina	Uruguay	Paraguay
Población (2005)	186.112.794	39.537.943	3.415.920	6.347.884
PBI *	1.489.350	484.480	31.570	26.840
PBI por habitante	8.002	12.253	9.242	4.228
Exportaciones**	118.000	40.000	3.500	2.936
Importaciones**	70.000	28.000	3.400	3.330

* Datos de 2004, millones de dólares. Fuente: FMI

** Datos de 2005, millones de dólares

Mini gasoducto y papeleras: canales de quejas

La cumbre entre los presidentes de Venezuela, Bolivia, Paraguay y Uruguay por el tema del gas sirvió para expresar los desacuerdos internos. Ante la presencia de Venezuela -el nuevo integrante del bloque, con rol de mediador por un lado, y de socio de Brasil y Argentina en el megagasoducto, por el otro- Uruguay planteó la situación al interior del bloque en la voz de su presidente, Tabaré Vázquez: "El Mercosur (así) no sirve (...). Las integración regional es importante, pero al Mercosur lo tenemos que mejorar porque éste no es el que queremos Uruguay ni Paraguay" (C 20/4). Justamente, el tratado firmado entre los chicos para la construcción del mini gasoducto (de 6.000 km) que llevará gas desde Tarija (sur-este boliviano) a Paraguay y Uruguay sin pasar por Argentina -y que tendrá financiamiento y asesoramiento de Venezuela- muestra la problemática interna, ya que en el mega gasoducto (entre Venezuela, Brasil, Argentina, de unos 12.000 km) no fueron tenidos en cuenta Paraguay y Uruguay. Al respecto, sobre el rol regional del mini gasoducto, más allá del gas, Tabaré explicó: "es una demostración de que los países menores en cuanto a superficie, población y poderío económico también pueden unirse para llevar adelante proyectos sólidos, serios y realizables

que beneficien a sus pueblos (...) no tenemos que depender de lo que los grandes países pretendan realizar" (LR 20/4).

En esa cita aprovechó Tabaré para hacer más visible el latente conflicto en el bloque entre chicos y grandes, pero utilizando a las papeleras como caballito de batalla. Días antes, Uruguay había presentado su demanda ante el Tribunal de Solución de Controversias del Mercosur y ante la Comisión de Representantes Permanentes del bloque para que intercedan en el conflicto con Argentina. Ambos organismos no se habían expedido sobre tal situación al momento de la cumbre y Tabaré reclamó: "Es una respuesta que se está prolongando demasiado". Sin ofrecer alguna solución que convenza, el presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, Carlos "Chacho" Álvarez, declaró días más tarde: "El conflicto se va a resolver bien, es un problema de tiempos" (C 22/4).

Hacia el norte me voy

Pero la situación de Uruguay y Paraguay al interior del bloque ya había sido instalada a comienzos de mes, y también por la cuestión de las papeleras, por el ministro de economía uruguayo Danilo Astori, quien había afirmado: "esto de las papeleras es la contradicción más grande que se pueda concebir en un proyecto de integración regional poniendo al desnudo los grandes obstáculos que existen en la región" (C 5/4). Las papeleras son la excusa para presionar al interior del bloque y amagar con un acercamiento a los EE.UU., en momentos que éste firma tratados bilaterales (TLC) con quien pueda como modo de recomponer su peso en la región luego de la última cumbre de las Américas y de la solidez aparente que mostraba, al menos hacia el exterior, el Mercosur.

Paraguay ya había amenazado con un acercamiento a EE.UU. a partir del permiso de entrada e inmunidad de las tropas norteamericanas en su territorio para entrenamiento, en medio de la conflictiva situación que vivía Bolivia por esos días (renuncia de Mesa y movilizaciones en todo el país), y Uruguay ya tiene un tratado de protección a las inversiones norteamericanas, y, si bien aclaró Astori públicamente que "es impensable retirarse del Mercosur", también observó que: "A Uruguay le falta margen de maniobra dentro del bloque. Lo que hemos obtenido ahora fueron resultados negativos, retrocesos. Para el Mercosur es un retroceso respecto a cuando se gestó en 1991. En ese marco nos queda un solo camino: mejorar la inserción de Uruguay fuera de la región para ganar poder de negociación, ganar espacio de maniobra adentro" (LR 5/4), y es por eso que este país empieza a coquetear con una firma de TLC con EE.UU.

En el contexto actual eso sería irse del Mercosur, quedando responsable Uruguay de romper el bloque regional y abriendo un conflicto ya visible con una de las bases de la alianza social que conduce el gobierno del estado uruguayo, la fracción de los sectores populares, aglutinados bajo el Frente Amplio (FA). Tanto Tabaré como el FA niegan la posibilidad de firmar el acuerdo. Pero los números de la economía del país del este, —y las palabras de su ministro de economía— dicen otra cosa: "Estamos negociando un acuerdo de acceso al mercado norteamericano y de inversiones. Hoy EE.UU. le compra a Uruguay más que Brasil y Argentina juntos. Uruguay está recibiendo inversión extranjera directa de fuera de la región con volúmenes muy importantes. Uruguay tiene que apostar a eso" (LR 5/4). Para suavi-

zar el clima en el cono sur, el presidente Tabaré Vázquez ha dicho que "no se encuentra en nuestra agenda un TLC con Estados Unidos, pero sí incrementar el comercio con dicho país" (LR5/4). Desde los EE.UU., ni lerdos ni perezosos, intentaron meter cuña en la región: el subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales de Estados Unidos, Clay Lowary, dijo que "su país explora la posibilidad de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Uruguay", aunque afirmó que "probablemente eso no se concretaría pronto" (LR 5/4).

De esta forma, el presidente venezolano Hugo Chávez se apresuró en señalar la intromisión de EE.UU. en la región, afirmando que el conflicto al interior del bloque demuestra la influencia de este país y del imperialismo: hay "fuerzas imperialistas que nos quieren dividir por unas papeleras. Es obvio que estamos hablando del gobierno norteamericano. No tengo la menor duda de que actúan entre bastidores. E intensificaron esa batalla después de la derrota que sufrieron en noviembre en Mar del Plata con su proyecto de implantar el ALCA" (C 21/4).

En el mismo sentido el gobernador del estado de Paraná en Brasil, Roberto Reaquiáo, afirmó que el conflicto entre uruguayos y argentinos tienen que ver "con multinacionales que no son ni de Argentina ni de Uruguay (...) quiénes vienen a embarrar la cancha entre los dos países con las mismas papeleras que acabaron con algunos ríos de Canadá" (C 21/4).

Contra un TLC de urgencia y sin legitimidad

En *Análisis...* anteriores veníamos viendo cómo el denostado y saliente gobierno de Alejandro Toledo en Perú demoraba el momento de ratificar la firma del tratado de libre comercio con EE.UU.

Concluido el acto electoral en los primeros días de abril, y con la victoria parcial de Ollanta Humala, el primer mandatario se trasladó a Washington. Desde Perú, el reconocido congresista Diez Canseco denunciaba: "de manera prepotente y antidemocrática el gobierno quiere aprovechar la incertidumbre electoral y la semana santa para cerrar el TLC con EE.UU" (LR 12/4). La justificación quedó a cargo del Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Alfredo Ferrero, quien explicó que el apuro se debe a que si no se aprueba antes de julio en el Congreso norteamericano luego será muy difícil conseguirlo ya que en la segunda mitad del año el Capitolio estará abocado a las elecciones que en noviembre se dará esa instancia institucional. Paralelamente a estas acciones, el Congreso Peruano publicó el proyecto de ley que establece la obligatoriedad de someter a Referéndum la aprobación del TLC con EE.UU. Metiendo presión, el embajador del estadounidense anunció: "existe la predisposición de los congresistas de mi país para aprobar el TLC" (LR 20/4).

Distintas posiciones

Ante la firma del tratado de Libre Comercio con EE.UU., diferentes posiciones se han escuchado en este país. De esta forma se manifestaba Luis Zúñiga, presidente de la Comisión nacional del agro (Conveagro): "Con este TLC sólo el 1% del total de hectáreas cultivables se beneficiará ya que es el área destinada a la agroexportación" (LR 11/4); rápidamente le salió a contestar Felipe Llona, de la Asociación de Gremios Exportadores del Perú (AGAP), "ese 1% ha generado 1800 millones la última campaña agrícola y emplea a 600 mil trabajadores" (LR 11/4).

A la defensa de los más concentrados se opone la de los pequeños, tendientes a ser pisados. En la voz de Miguel Farfán, Secretario General de la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru II que nuclea a pequeños propietarios, se escuchó: “*Estamos convocando de urgencia a todas las ligas agrarias provinciales y distritales para ir a Lima, al Congreso y exigir un referéndum a nivel nacional (...). Quienes respaldan esta firma y su aprobación inmediata apenas llegan al 25% de la ciudadanía. La candidata que tuvo una postura favorable al TLC no participará de la segunda vuelta*” (LR 12/4), en referencia a Lourdes Flores.

El bloque que conforma la Sociedad Nacional de Industria (SIN), la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Asociación de Exportadores (Adex) se pronunció contrario al Referéndum aduciendo que sólo politizará la cuestión. Este bloque intenta que el Ejecutivo ejerza sus facultades legales. A su vez, acusaron a Hugo Chávez de financiar a las organizaciones contrarias a la firma.

Sin fuerza

Para seguir avanzando en las instancias legales del acuerdo, el Ministro de Relaciones Exteriores y Turismo aceptó que sea debatido, luego de la segunda vuelta, por el “*Congreso actual*”. Esto luego de que los dos partidos en esa instancia e incluso la Unidad Nacional de la derecha Lourdes Flores presentara sus recaudos ante un acuerdo apresurado. Humala -en plena campaña para ser reelecto en segunda vuelta en un reñido final con Alan García- subrayó que no está en contra de la firma del TLC porque está a favor de ampliar los mercados, pero opina que el acuerdo suscrito “*ha sido mal negociado... (y está) carente de legitimidad política al ir en contra de lo expresado en las elecciones*” (LH 13/4). El Ministro Ferrero sin argumentos señaló: “*El señor Humala debe informar como compensará al Perú por no firmar el TLC con EE.UU.*” (LR 20/4).

Venezuela: ruptura de la CAN y acercamiento con el Mercosur

La firma de los tratados de libre comercio era la respuesta de EE.UU. en la región luego de fracasada la cumbre de las Américas en Mar del Plata. La firma del mismo con Colombia, y el avance en las negociaciones con Perú, llevaron a Venezuela a retirarse del bloque andino, señalando que el mismo no puede existir si los países miembros firman acuerdos comerciales con EE.UU.

La Comunidad Andina de Naciones fue creada en 1969 integrando a Chile, Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador. Más tarde ingresó Venezuela y se retiró Chile en 1974. De esta manera, el anuncio de Venezuela pone en jaque a este bloque regional, y deja al desnudo las contradicciones entre sus miembros.

Chávez ya había adelantado que la CAN “*se tornó una gran mentira*” cuando dos de sus países miembros, Perú y Colombia, decidieron firmar un tratado de libre comercio con EE.UU. (FDT 19/4).

En el marco del encuentro con los presidentes de Bolivia, Paraguay y Uruguay, y luego con el gobernador del estado de Paraná en Brasil, Chávez se encargó de fundamentar la determinación de su país de retirarse: “*La Comunidad Andina de Naciones está herida de muerte y hoy puedo decir que está muerta. La mataron. No existe. Venezuela se sale de la Comunidad Andina*” (21/4 LN), agregando que “*lo que terminó de matar a la CAN fue la infidelidad de países*

como Colombia y Perú que buscaron y firmaron el TLC” (C 21/4). Según Chávez, luego de Mar del Plata, EE.UU. puso “*en marcha el plan B, que era el acuerdo de libre comercio (TLC) firmados en forma bilateral con países de la región*”, para agregar que esa política: “*es una cuña metida en la región*” (C 21/4).

En el mismo tono se expresó, Evo Morales, aunque todavía este país se mantiene dentro del bloque, ya que la mayoría de sus exportaciones se destinan a Perú y Colombia: “*Siento que la CAN ha muerto*” (LN 21/4), afirmó Evo.

Por su parte, Colombia es el país más afectado, ya que Venezuela es el segundo receptor de sus exportaciones. Según Chávez: “*Muchos productos norteamericanos van a entrar en Colombia sin ninguna tarifa, y tomaran espacios comerciales que fueran nuestros durante muchos años. La decisión de Colombia de abrir las puertas de las exportaciones súper-subsidiadas de los EE.UU. nos pone en competencia con ellas*” (FDT 22/4).

Igualmente, la ministra de Industrias, María Cristina Iglesias, informó que Venezuela debe mantener en vigor en los próximos cinco años el programa andino de liberalización aduanera, por eso mantendrá la importación y exportación sobre las actuales condiciones tarifarias: “*El comercio con Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia continuará con absoluta normalidad; o sea, el tránsito de mercaderías, de personas y de todo que garantice la actividad comercial normal de nuestros países no tienen por que cambiar*”, resaltó Iglesias. (FDT 22/4)

Ante el papel que le debía caber al Mercosur, el propio Chávez afirmó que bajo estas circunstancias el Mercosur estaba en vías de muerte también, ya que tiene que trabajar sobre las asimetrías entre sus miembros: “*irá a morir, así como la Comunidad Andina de Naciones*”. Para Chávez, el Mercosur continua siendo un proyecto válido, que precisa ser modificado. Aunque públicamente destacó que: “*Ni Brasil ni Argentina harían semejante cosa (en cuanto firmar un TLC). En cuanto Uruguay, el presidente Tabaré Vázquez me aseguró que su gobierno no irá jamás a firmar un TLC con la administración norteamericana. Lo mismo me dijo Nicanor Duarte Frutos (presidente de Paraguay)*” (C 21/4).

Ecuador: intencionalidades que complican la firma del TLC

Previamente a la salida de Venezuela de la CAN, la situación en Ecuador no era (ni sigue siendo) menos conflictiva. Las negociaciones para cerrar un acuerdo de Libre Comercio con EE.UU. están generando un sinfín de problemas al gobierno de Palacio, ya sea de parte de las diferentes fracciones de la burguesía local que temen ser barridas por los productos norteamericanos, como por parte de los movimientos sociales que encabezan la oposición a la firma del mismo.

Los **temas ya cerrados** y acordados para la firma del TLC son los siguientes: cooperación, competencia, defensa comercial, servicios financieros, normas técnicas, comercio electrónico, aduanas, telecomunicaciones, inversiones, compras públicas; en el sector textil y acceso industrial hay acuerdos pero con reparos.

Los **temas sensibles** (a los que no se llegó a un acuerdo) son, para el sector agrícola, el arroz, soja, el maíz y la carne (un ejemplo que grafica la situación: en el tema maíz, EE.UU. pretende exportar 400 mil toneladas

métricas al año, mientras Ecuador propone reducir esa cifra a la mitad -200 mil tn-; para el sector industrial, los empresarios textiles se quejan por la entrada de ropa usada, y los fabricantes ecuatorianos en general por las normativas que se quieren imponer con respecto a la propiedad intelectual.

En el marco de las negociaciones, las dificultades aparecieron luego de que el Congreso ecuatoriano aprobará una Ley que obligará a las compañías extranjeras a entregar al Estado el 60% del ingreso extra por el alto precio del crudo. En su propuesta original, el presidente Alfredo Palacio planteó una repartición por igual, pero el Congreso al aprobarla inclinó la balanza a favor del Estado. A raíz de eso el mandatario vetó la norma y espera la revisión de los diputados. Si bien oficialmente el gobierno de EE.UU. no ha hecho ningún pronunciamiento sobre la reforma de Ley, se solidarizó con las compañías afectadas implícitamente al suspender el 3 de abril el curso de las negociaciones. La Ley afectará a empresas como la Oxy (que explota 100.000 de los 532.000 barriles diarios), Repsol-YPF y la francesa Parencos.

El Secretario de Administración, José Apolo, confió en que Washington actúe con la misma consideración que lo ha hecho Quito frente al endurecimiento de las normas migratorias pese a que *“la misma afecta a los ecuatorianos en ese país”*. *“Sin embargo es la soberanía norteamericana la que hace que esas leyes se expidan y apliquen y con ese mismo respeto que tenemos por esa disposición, esperamos que Estados Unidos, respete la decisión soberana de recuperar el equilibrio económico en los contratos petroleros”* (LH 12/4). Las petroleras consideran que las reformas a la ley son inconstitucionales y que violan normas como la de seguridad jurídica por lo que no descartan demandas y arbitrajes.

En contra (total y con reparos)

Antes de pasar a ver cómo se han posicionado las diferentes cámaras y bloques empresariales ante la firma del TLC, hay que destacar que mientras se protege y se alientan las manifestaciones a favor del TLC, impulsadas por los empresarios y sus trabajadores, la represión se ensaña contra quienes se movilizan contra el tratado. En este plano, se entiende la continuación del Estado de Emergencia en Imbabura, Cotopaxi, Ungurahua, Pastaza, Cañar y Chimborazo (focos de las protestas contra el TLC. Véase *Análisis... N° 69*). La Confederación Nacional Indígena del Ecuador (CONAIE) anunció que retomará la lucha para impedir la firma del Tratado, y anticipando acciones radicales exigió: *“el respeto total a la reforma de la ley de hidrocarburos aprobada por el Congreso”* (LH 3/4). Ratificando el llamado a Asamblea Constituyente, nacionalización del petróleo, caducidad del contrato de Occidental (Oxy) y el levantamiento del Estado de Emergencia.

Por su parte, la agrupación que nuclea a los arroceros, Fenacle, ve con mucho escepticismo la negociación. Se basan en la postura indeclinable de EE.UU. de no aceptar ninguna exclusión en torno del maíz, el arroz y los lácteos, exigiendo arancel cero para todos estos productos. Para Juan Grijalba, gerente de la Asociación de ganaderos de la Sierra y Oriente, *“no se puede permitir el ingreso irrestricto de leche”*; López de la Fenacle propone asambleas entre los productores, *“si no se logran consensos, no habría justificación para ir a la siguiente ronda”* (LH 3/4). Los representantes de ambos sectores no descartaron sumarse a

futuras protestas de la CONAIE, si eso ayuda a levantar el secretismo tras la firma del acuerdo y se logra una consulta popular.

A favor

Por su parte, los empresarios de las principales Cámaras empresariales del país acusaron al presidente Palacio de haber “trabado” la negociación con la propuesta de ley, y se nuclearon en defensa de las transnacionales petroleras. El presidente de la Comisión de asuntos Internacionales y voz de estas Cámaras, Alfredo Serrano, dijo que *“en el gobierno existe un grupo que está haciendo todo lo posible para que no se firme el TLC, encabezado por el Ministro de Economía y Finanzas, Diego Borja, de lo contrario, no se entiende cómo se envió el proyecto de reformas a la Ley de Hidrocarburos, poco antes de cerrar la negociación”* (LH 18/4).

Ante este escenario Blasco Peñaherrera, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción, afirmó *“en este momento el TLC está en coma profundo y no se le debe mentir al país”* (LH 21/4).

Brasil y el recambio de Palocci: siempre igual, todo igual, siempre lo mismo...

Hasta el momento, el cambio del ministro más importante de Lula no manifiesta modificaciones dentro del esquema económico ni posibles repercusiones en el Mercosur. Incluso, continúa la línea que hace tiempo azotó al gobierno de Lula: las denuncias de corrupción. El presidente, por el momento, sigue ocupado en su campaña.

Mantenga por Palocci, pero el mismo esquema

A fines del mes de mayo renunció el Ministro de Hacienda, Antonio Palocci, uno de los autores de la política económica “ortodoxa” que lleva a cabo el gobierno de Lula Da Silva desde hace 3 años y 7 meses. Lo novedoso no es que este cambio de ministro responda a un proceso de movilización social o a un cambio en la política económica apoyada por alguna fracción de la burguesía perjudicada por el esquema actual, al menos en la apariencia no se presenta así, sino más bien que lo sucedido se presenta con lo que persigue al gobierno de Lula desde hace bastante tiempo: “la corrupción”.

Palocci fue acusado de violación del secreto bancario de un casero que lo acusa de haber visitado varias veces la llamada “mansión del loby”, la vivienda alquilada –y cuidada por este sujeto– por asesores suyos donde acordaban negocios sucios, según se acusa, y fiestas con prostitutas. Además, Palocci tiene que probar ante la justicia que no recibía 24.000 dólares por mes por coimas de una empresa de recolección de residuos del municipio paulista de Ribeiro Preto, cuando él era el jefe comunal de ese distrito. Estas acusaciones en el marco de otras que también corren con el ahora ex ministro.

Su sucesor, Guido Mantenga, se desempeñaba en el cargo de presidente del Banco Nacional de Desarrollo Social (BNDES) y tiene también la máxima confianza de Lula. Por proceder de manejar el organismo que desarrolla la infraestructura para la producción y circulación a través de la inversión pública, se barajó (más que nada los sectores industriales de San Pablo nucleados en la FIESP) que cambiará el esquema económico alejándose de la ortodoxia financiera. La ilusión de cambiar ese esquema consistió en bajar la tasa de interés SELIC (actualmente en el 16%, convirtiendo al Brasil en el país con

mayor costo financiero del mundo) y, además, en la posible ida del titular del Banco Central, Enrique Meirelles (ex presidente del Bank of Boston mundial).

Ni una cosa ni la otra ocurrió hasta el momento. Por las dudas, el propio Mantenga declaró al asumir: “no habrá ninguna alteración del rumbo económico del Brasil. La política económica no es de un ministerio, es la política económica del presidente Lula” (C4/4).

Efectos para la campaña

Justamente, el presidente Lula es quien más se preocupó por atenuar los efectos del cambio de ministro. Pero no por la política económica y sus posibles transformaciones, sino por la repercusión en las encuestas para su reelección presidencial. Recordemos que cuando el ex mi-

nistro José Dirceu (y otros funcionarios del gobierno y del Partido de los Trabajadores) renunciaron a sus cargos acusados de corrupción, el presidente bajó su popularidad y en las intención de voto para las elecciones de octubre de 2006. Por el momento, no parece haber sacudido el perfil del presidente, quien acusó a la oposición de ser los responsables de orquestar los las denuncias de corrupción para debilitar su imagen. Al respecto, el candidato opositor por el PSDB –que conduce el ex presidente Fernando Cardoso– Gerardo Alckmin, admitió que, si bien existe un movimiento dentro de su partido que quiere llevar a Lula al juicio político, “No quiero discutir el *impeachment*, quiero derrotar a Lula y al PT en las urnas”, (C 15/4).

Coyuntura política

Perú: resultados parciales y alianzas predichas

Faltando solamente contar 205.000 votos, a 18 días de los comicios generales, datos parciales del diario El Comercio (Perú) del día 28/4 con el 99,51% de las actas escrutadas, daban a Ollanta Humala (PNUP) 30,66% de los sufragios válidos, a Alan García (APRA) 24,33% y a Lourdes Flores (Unidad Nacional –UN–) 23,73%. Es decir, estos dos últimos separados por 72.731 votos.

Los resultados definitivos de las presidenciales están condicionados a las apelaciones que tanto UN como el APRA le reclaman a la Junta Nacional Electoral. A pocos días de terminada la elección, la candidata de la UN denunció irregularidades en el conteo de los votos en más de 7300 actas, alegando que pese a no tener irregularidades no fueron computadas y que corresponden en un 50% al electorado de Lima, afín a su candidatura. La importancia de esta denuncia radica en que estas actas corresponden al 10% del padrón, 1,4 millones de votos. El APRA, por su lado, denunció irregularidades en el extranjero. La JNE rechaza estas denuncias aduciendo “*si hubo error en las mesas los personeros debieron denunciarlo y observar las actas. Ahora no se puede hacer nada (...) además fueron presentadas vencido el plazo que fija la ley*” (LR 25/4). Con todo esto los resultados estarán recién para el 10 de mayo, aunque se descuenta que Alan García irá a segunda vuelta.

Sin resultados finales en las elecciones parlamentarias, se estima que seis fuerzas se repartirían las 120 bancas en juego del Legislativo Unicameral. El frente electoral Partido Nacional Uniendo Perú (PNUP) obtendría 43 bancas gracias al 20,5% obtenido. La Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) 35 bancas al obtener el 20,1% del electorado. La Unidad Nacional (UN) 19 bancas producto del 15,3% obtenido. La sorpresa la dio Alianza por el Futuro (nuclea al fujimorismo) logrando el 13,5% de los votos y obteniendo, así, 15 bancas. Este escrutinio parcial nos anticipa que ningún partido logrará la mayoría.

El director de la Consultora de opinión pública, Manuel Saavedra, intentó trascender el clima electoral: “No se trata de la polarización de partidos políticos, sino una polarización mucho más peligrosa y preocupante, a nivel de la ciudadanía, de la clase empresarial frente a la clase trabajadora, de Lima frente a la provincial, de los blancos frente a los cobrizos (mestizos)” (N 10/4).

Se va la segunda

Con miras a la segunda vuelta electoral el candidato más criticado por el *establishment*, Ollanta Humala, aclaró que de llegar a la presidencia no se producirá ningún shock traumático, se respetara la inversión y la propiedad privada, aunque sí revisará los contratos con las multinacionales. Citó el ejemplo del Consorcio Camisea (Techint y Pluspetrol), gasoducto que une a Cuzco con Lima y que desde su puesta en funcionamiento en 2004 se rompió cinco veces.

Sin entrar en demasiados detalles aclaró que nacionalización de los recursos estratégicos no significa expropiación.

Días antes de las elecciones el candidato del APRA bajó la guardia y explicó, “que si bien los primeros meses de campaña fue enfático en señalar que la política de la UN era la continuidad de la política económica en favor de los poderosos, en estos momentos su lucha es contra el peligro que representa la ilusión de gente extremista e improvisada (...). Nosotros no estamos en guerra contra Unidad Nacional. Estamos intentando detener un retroceso histórico” (LR 3/4). Luego de la elección, que contra todos los pronósticos lo posicionó en la segunda vuelta, García coqueteó con simpatizantes de Valentín Paniagua de Acción Popular (cuarta fuerza en las presidenciales) al destacar sus intenciones de concertar una alianza. En definitiva las palabras de García concluyeron en la propuesta de un Gran Frente que reafirme la “democracia y la gobernabilidad”.

A la pregunta de los analistas ¿Dónde buscará Humala votos?, el candidato contestó “*no pensamos hacer alianza con ninguna agrupación política, sólo con el pueblo peruano*” (LN 13/4).

Seguridad

Algunos datos generales sobre la migración latinoamericana

El fenómeno migratorio no es nuevo en América Latina. Oleadas migratorias han partido para EE.UU., Europa y Asia en busca, fundamentalmente, de un trabajo estable y de una mejoría en la situación económica. Estos flujos han aumentado considerablemente en los últimos 20 años, tras el halo de reformas neoliberales implementadas en todo el continente.

En la actualidad, según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre 25 y 27 millones de latinoamericanos viven y trabajan en el extranjero, siendo 22 millones en los mercados de Norteamérica, Europa y Japón. Donald Terry, titular del fondo de inversión multilateral del organismo, precisó que los trabajadores migrantes de la región conforman actualmente 20% de la fuerza laboral en Madrid, la capital española, y que en EE.UU. los trabajadores de Latinoamérica y el Caribe constituyen el 12% de la fuerza laboral.

Estos trabajadores migrantes de Latinoamérica y el Caribe enviaron 53.600 millones de dólares a sus familias en sus países natales el año pasado (remesas), un incremento de 17% respecto de 2004, siendo América Latina el mayor mercado de remesas del mundo, superando, por tercer año consecutivo, a la inversión extranjera directa y la ayuda económica del exterior combinadas: *"Los cambios en el comercio, la inversión y las comunicaciones internacionales han obligado a los sistemas económicos y políticos del mundo a adaptar nuevas reglas y mecanismos para ajustarse a las realidades modernas (...). Lo mismo tiene que hacerse en el caso de los trabajadores migrantes, que se han convertido en parte integral de los mercados laborales del mundo"*, indicó Terry (El Universal de México 30/3. De aquí en adelante EU).

Los países más cercanos a EE.UU. registraron los mayores flujos, con México captando 20.000 millones de dólares en divisas extranjeras a través de las remesas en 2005 (pero ya se registró un incremento en 27% en enero de 2006). Le siguen los cinco países de Centroamérica y República Dominicana que recibieron 11.000 millones de dólares, Brasil con 6.000 millones, Colombia 4.000 y las otras cuatro naciones andinas suman 9.000 millones (EU 30/3).

Migración y EE.UU.: la encrucijada de México

Como ya anticipáramos en el *Análisis...* anterior, la apertura económica y la integración comercial producida luego de haber firmado el NAFTA (TLC entre México, EE.UU. y Canadá) en 1994, no conllevó el crecimiento esperado por parte del gobierno mexicano, aunque sí se produjo un aumento considerable de las exportaciones. Este crecimiento se basó, primordialmente, en la proliferación de un empleo precario (en la frontera norte) y un modesto crecimiento del mercado interno, lo que repercutió en la poca capacidad de absorción de los nuevos jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo y en las dificultades económicas de los poco más de 100 millones de mexicanos.

La migración de México hacia Estados Unidos ha sido reconocida como el nexo migratorio bilateral más importante del mundo. Pero desde la terminación del programa de braceros en 1964, México y EE.UU. han hecho poco para llegar a un acuerdo bilateral. Los residentes mexica-

nos en Estados Unidos alcanzan 11 millones de personas habiendo sido menos de 900.000 en 1970. Los flujos anuales han pasado de 27.000 en el promedio de 1960-1970 a casi 500 mil entre 2001 y 2005. Los indocumentados, de representar 40% de los flujos temporales entre 1993 y 1997, alcanzan 75% en el periodo 2001-2003.

Esta situación intentó ser modificada por los presidentes Fox y Bush en el año 2001. La primera reunión del grupo de negociadores se realizó hace cinco años (el 4 de abril de 2001) en la ciudad de Washington. La delegación mexicana entregó en esa ocasión un documento en el que delineó su posición y formuló su propuesta: 1. regularizar la situación migratoria de los mexicanos indocumentados residentes en EU; 2. crear un programa de visas dirigido a trabajadores temporales; 3. incrementar el número de visas de residencia permanente para acercarlo a las realidades del fenómeno migratorio; 4. combatir la inseguridad y la criminalidad en la zona fronteriza; y 5. desplegar esfuerzos compartidos en favor del desarrollo en las zonas de origen de la migración para no profundizar el abismo económico que las separa de las zonas de destino (EU 3/4). Los atentados del 11 de septiembre de 2001, hicieron que las negociaciones se diluyeran y se dejaran de lado. El gobierno norteamericano colocó la seguridad en el centro de sus preocupaciones.

Como preludio de las movilizaciones que están ocurriendo al cierre de esta edición por parte de los migrantes latinoamericanos (y del resto del mundo), a fines de marzo se llevó adelante la Cumbre de Cancún entre el presidente Bush, el mexicano Fox y el primer ministro de Canadá Stephen Harper. La misma tenía como meta avanzar en los acuerdos migratorios entre ambos países así como solidificar los aspectos ligados a la seguridad.

Pero, sin lugar a dudas, la seguridad fue el eje de las discusiones, subsumiendo el tema migratorio al primero. Bush comentó que estaría dispuesto a impulsar una ley migratoria siempre y cuando contemple elementos que garanticen la seguridad en la frontera: *"No queremos que la gente se meta ilegalmente haciendo trabajos que los americanos no hacen, queremos todo ordenado, queremos evitar la presión en las fronteras"* señaló el mandatario, quien reiteró que una amnistía para ilegales es imposible (EU 31/3). Fox asumió su responsabilidad en la seguridad fronteriza (recordemos que durante su administración han muerto en la frontera más de 2.000 migrantes al intentar el cruce ilegalmente) y se comprometió a desarrollar la economía, si el Congreso estadounidense aprueba una reforma migratoria integral. A su vez se comprometió, además, a reforzar la seguridad en la frontera sur para impedir el cruce ilegal de personas de Centroamérica hacia Estados Unidos. *"En la frontera sur estamos muy activos en el patrullaje, en construcción de estaciones para detener a los migrantes ilegales que entran a territorio mexicano y regresarlos a su país, siempre con el pleno respeto a los derechos humanos"*, dijo Fox (EU 31/3).

Dentro de este marco, la influyente Conferencia de Obispos católicos, de gran importancia en el debate político mexicano, dio su apoyo a la iniciativa demócrata (Kennedy-McCain) que plantea no sólo el trabajo temporal sino un camino para la regularización migratoria de los indocumentados (EU, 26/3).

Argentina

Durante el mes de abril, observamos el proceso de constitución de la *alianza social* que se expresa en el gobierno de Néstor Kirchner. La misma puede verse a través de la disputa por la recomposición de algunas de las funciones del Estado nación, en lo que respecta a la distribución del ingreso y a las condiciones laborales y en el problema de la regulación de la producción y venta de carne. En este mismo proceso, se hicieron explícitos sus límites: por un lado, en cuanto a quiénes y cómo

la conforman y, por el otro, en cuanto a la capacidad de realizar su programa a nivel general.

Al mismo tiempo, veremos cómo el proceso de descomposición institucional y la crisis de representación de los últimos años se constituye cada vez más en un problema sin solución. Así, observaremos a distintas fracciones del capital —enfrentadas en otros ámbitos— unificar sus reclamos, exigiendo la *intervención* estatal en pos de la recomposición del orden público y legal y la *armonización* del conflicto social.

Pelea por las ganancias

La lucha por la distribución de la riqueza social. Los límites de la *alianza social*

La formación de una capa “privilegiada” de trabajadores

Desde diciembre de 2001, el incremento de los precios internos alcanzó un 79,1%. Mientras tanto, el aumento salarial de los *trabajadores privados en blanco* llegó, en promedio, al 94,6%, superando de esta manera el índice inflacionario. Por el contrario el 47% del total de los trabajadores asalariados, los que se encuentran *en negro*, recibieron en dicho período subas salariales por el 37,3%. Por su parte, los *trabajadores del sector público* vieron subir sus ingresos en un 25,8% (C 8/4).

Como complemento de los datos recién consignados, cabe agregar que el porcentaje de trabajadores que se beneficiaron con aumentos salariales por encima de la inflación marca un 21,9% del total de los asalariados. Se trata de 2.402.088 trabajadores sobre 10.948.395 personas que perciben un salario (C 24/4). Aún deberíamos agregar que ese 21,9% sería menor si se incluyera en el total a los trabajadores desocupados y a aquellos trabajadores que viven de un ingreso no identificado como salario (cuentapropistas, por ejemplo).

Esta capa de trabajadores que logró los mayores aumentos se alineó, a través de sus representaciones gremiales, a favor de la política económica oficial en general, formando una parte de la *alianza social* que expresa el gobierno de Kirchner, *alianza* conducida por una fracción del capital más concentrado en la Argentina.

De hecho, el mes pasado, empresas y direcciones sindicales acordaron, con la mediación del gobierno del Estado, incrementos salariales en distintas ramas: trabajadores del subterráneo (entre 30 y 39%), choferes de camiones (19%), trabajadores bancarios, maquinistas de trenes (17%), encargados de edificios de la capital (18,5%), trabajadores del comercio (19%) y el sector de trabajadores del estado nucleados en la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) (19%).

Significativamente, fue el propio presidente Kirchner quien medió entre las partes integrantes de la *alianza social*, en torno a la distribución de la riqueza socialmente producida: “La lucha contra la inflación la tenemos que dar todos. Los trabajadores no son los que generan inflación. Usted —en referencia a Víctor Klima, presidente de Volkswagen— lo sabe igual que yo. Yo sé de la prudencia de los trabajadores (...) Me

duele ver en algunos medios que les echen la culpa a los trabajadores. Tiene que haber responsabilidad empresarial” (LN 5/4).

Al mismo tiempo, la disputa entre el *capital* y el *trabajo* cobró mayor relevancia en torno a los cambios aplicados o proyectados en la legislación laboral.

La lucha por los cambios en la legislación laboral. Los límites posibles de la *alianza social*

El día 24 de abril, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, el jefe del bloque de diputados del PJ, Agustín Rossi, y el titular de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Héctor Recalde (hombre de la CGT) se reunieron con los titulares de la Asociación Empresarial Argentina (AEA), la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), IDEA, la Unión Industrial Argentina (UIA) y las industrias alimenticias (COPAL) para discutir los cambios venideros en la legislación laboral.

Por un lado, se discutió la reforma aplicada durante el actual gobierno a la ley que rige el funcionamiento de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART). La misma habilita al trabajador a iniciar acciones legales contra la empresa, si el seguro por accidente cobrado no cubre satisfactoriamente las necesidades del aquél. La UIA expresó —en un comunicado en el que reclamaba cambios— que la ley de ART “*tiene que ser razonable y equilibrada y contribuir a una reducción drástica de la litigiosidad que se convirtió en extremadamente preocupante*” (P12 20/4).

Por otro lado, la razón del conflicto tiene que ver con la *modificación* aplicada al artículo 66 de la ley de Contrato de trabajo, gracias a la cual un trabajador, al percibir un cambio en sus condiciones de trabajo —fundamentalmente tras ser cambiado de actividad— podrá darse por despedido sin causa o accionar ante la Justicia contra la empresa, en defensa de sus condiciones anteriores.

Si desde la UIA, Héctor Méndez, titular de la entidad, advertía que “*nosotros habíamos pedido el veto de la modificación del artículo 66° de la ley de contrato de trabajo*” (LN 26/4), una más poderosa coalición de corporaciones del capital, formada por la AEA, UIA, CAS, COPAL y transportistas, envió una contundente carta al jefe de Gabinete, en donde podía leerse: “*Medidas como éstas dificultan las políticas instrumentadas por el Gobierno que apuntalan el crecimiento y mejoran la distribución de la riqueza*” (C 26/4).

Como respuesta al avance del capital, la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) salió a denunciar pú-

blicamente, en una solicitada, a aquellas obras en donde los trabajadores no se encontraran legalmente registrados: “La UOCRA ha resuelto la publicación de un listado de obras que han sido detectadas y preventivamente denunciadas en el ámbito de la Ciudad de Bs. As., para la verificación de sus irregularidades e incumplimientos tanto a las normativas de seguridad e higiene como a las referidas a informalidad laboral” (C 24/4). En el mismo documento, se pasaba revista de la dirección de algunas obras relevadas y denunciadas por el gremio.

Con todo, la intervención de la *burguesía coligada*, claramente en contra de un avance que modifique la situación de *flexibilización laboral* generalizada y garantizada legalmente durante la década del '90 –bajo los gobiernos de Carlos Menem y Fernando De la Rúa–, expresó los límites posibles de la *alianza social*. Acordados determinados aumentos salariales con una fracción de la clase obrera –en un contexto de expansión económica sostenida y, sobre todo, de crecimiento de la productividad del trabajo (mayor capacidad de producción por cada trabajador) que según el Ministerio de Economía se encuentra en el nivel más alto de los últimos 15 años (la productividad es hoy un 19% mayor que en 2002, según C 12/4), la *fracción del capital* (tanto las capas más concentradas como las categorías media y pequeña), que dirige además la alianza establecida con una fracción de la *clase obrera*, endurece los marcos que establecen el *adentro* y el *afuera* de la alianza en cuestión.

Se hizo necesaria, en este punto, la *intervención del gobierno del Estado*, para garantizar la *cohesión de la alianza*. El encargado fue el flamante secretario de Comercio Interno, Guillermo Moreno. Reunido con el presidente y el comité ejecutivo de la UIA, definió: “Queremos consolidar el modelo económico que a ustedes más les conviene. Para eso nos tienen que ayudar. No queremos enfriar la economía, ni subir las tasas de interés, ni bajar el dólar” (P 12 20/4).

Similares arengas en defensa del mantenimiento de la *alianza social*, dirigidas tanto a la fracción burguesa como a la proletaria, fueron lanzadas desde otras instancias gubernamentales. Desde la presidencia, Kirchner sostuvo que “si logramos que los empresarios y los trabajadores, en forma conjunta, con responsabilidad y sabiduría, resuelvan los problemas, la Argentina va a tener un futuro con mayores posibilidades y expectativas” (C 5/4). Por su parte, desde el Ministerio de Trabajo, Carlos Tomada ponderó la “responsabilidad exhibida en la negociación tanto por la dirigencia empresaria como por la dirigencia sindical” y marcó los términos de la *alianza social*, diciendo “que terminen esta discusión ya y éstos son los límites de la discusión” (C 7/4).

No es menor la necesidad de mantener cohesionado el frente, dadas las intervenciones de la otra fuerza social, que no termina de encontrar voz propia local y se expresa a través de sus formas de organización internacional y de sus aliados externos.

Así, el subsecretario del Departamento del Tesoro Norteamericano para Asuntos Internacionales, Tim Adams, ante la visita de la ministra de Economía argentina Felisa Miceli, señaló: “Hemos tenido a algunas empresas que han planteado su preocupación sobre el clima de inversión en

la Argentina y vamos a expresar esa preocupación, privadamente, a nuestras contrapartes” (LN 20/4).

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó, en su informe semestral Panorama Económico Mundial, respecto de la Argentina, que “las autoridades necesitarán introducir reformas en el sector de los servicios, incluyendo la liberalización de los precios, y aumentar la inversión en infraestructura”. Además, sugirió que, para detener la inflación, requerirán de “una combinación de superávit fiscales mayores a los presupuestados, tasas de interés más altas y una mayor flexibilidad cambiaria” (LN 20/4).

La intervención del Estado nación en la producción y distribución de carnes

Desde el abandono de la convertibilidad, varias han sido las medidas que los distintos gobiernos del Estado aplicaron en relación a la producción y distribución interna y externa de las carnes: imposición y subas del impuesto a las exportaciones (retenciones); aplicación de mecanismos de control de exportaciones (por ejemplo, entrega de permisos como requisito para vender al exterior); suspensión temporaria de las exportaciones; inhabilitación de empresas intermediarias de ganado (consignatarios); llamado a boicot desde Presidencia de la Nación contra el consumo de carnes rojas; establecimiento de precios de referencia para el mercado mayorista y minorista; amenaza de penalización (multas y prisión) contra productores y distribuidores que no respeten los precios de referencia determinados.

Frente a este aparato de medidas, cabe preguntarse qué fracciones del capital lo sostienen y cuáles lo combaten.

La base social de la política oficial

A los posicionamientos que han venido sosteniendo las medidas oficiales –los de la Asociación de Propietarios de Carnicerías de la Cap.Fed., de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y de la Asociación Empleados de la DGI (a.e.d.g.i.), citados en el *Análisis...* N° 70 (p.19)–se sumaron en abril otras organizaciones del capital y del trabajo.

El Sindicato Petrolero Privado de la Provincia de Córdoba publicó una solicitada de apoyo a la política oficial. Titulado “El boicot como instrumento insustituible para defender la capacidad adquisitiva de nuestros recursos económicos”, el documento reclamaba “que los combustibles no aumenten su valor (...) y que podamos comer carne vacuna, una vez que baje su precio; que sea cada vez mayor y más firme el apoyo popular a esas medidas, en particular de las Asociaciones Sindicales de Trabajadores de todos los niveles; que podamos ejercitar este nuevo esfuerzo de singulares características participativas y culturales sin ser defraudados, aún ante la creciente resistencia de los históricamente privilegiados, con la complicidad propagandística de siempre. ¡Aguante Presidente! ¡Siga su batalla por el país y su pueblo!” (C 6/4).

Por su lado –desde la Federación Agraria Argentina (FAA), corporación de los pequeños propietarios–, Eduardo Buzzi sostuvo que “después de los años '90, el Estado no puede estar ausente de las cuestiones estratégicas para la gente. El Gobierno puso equilibrio cuando los precios se dispa-

ban y ahora pone el marco para el crecimiento del sector. Éste es un acuerdo de todos?” (C 7/4).

Precisamente, en el momento en que el gobierno imponía el nuevo régimen de precios —que pasaba a incluir a todas las categorías del ganado vacuno—, el mismo Buzzi manifestaba: “*Nosotros apoyamos las medidas pero con la aclaración de que se tenga en cuenta a todos los productores*” (C 22/4). Es decir, adhesión a cambio de mayor protección estatal hacia las capas pequeñas de la burguesía vinculada al campo.

Finalmente, las empresas frigoríficas de capitales medianos —nucleadas en la Unión de la Industria Cárnica (UNICA)—, en la voz de su presidente Gustavo Valsangiacono, se alinearon a favor de las medidas oficiales: “*A pesar de tener las exportaciones paradas, apoyamos las disposiciones. Tenemos claro que no hay que dejar trepar la inflación y hay que mantener los precios para que lleguen a la gente*”. Al mismo tiempo, salieron a denunciar que, “*en un momento crítico donde se necesita la colaboración de todos los sectores, tal vez algunas entidades agropecuarias no estén colaborando como deberían hacerlo*” (C 26/4).

La oposición a la política oficial. Las acciones

El último día de marzo, en la ciudad de Mercedes (Corrientes), los propietarios de la tierra y el ganado de dicha provincia se convocaron en una protesta que tuvo como dirección a los presidentes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luciano Miguens, y de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Mario Llambías. En ese acto, el titular de las entidades rurales correntinas, Ricardo Mathó Meabe, amenazó duramente al gobierno: “*No creemos que la única solución a esta crisis sea implementar nuestro propio ejército, los piqueteros del campo. Si el gobierno puede pagar sus propios piqueteros, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? No queremos que nos obliguen a cortar rutas o puentes internacionales*” (C 1/4).

Apenas comenzado el mes de abril, la Sociedad Rural de Trenque Lauquen —con el apoyo de la Corporación de Asociaciones Rurales de Bs.As. y La Pampa (Carbap), ambas integrantes de CRA— realizó una marcha en repudio a la medida oficial de suspender las exportaciones de carne, sumándose así a similares movilizaciones registradas en Salliqueló (provincia de Bs.As.).

Pocos días después, en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, la Sociedad Rural de Río Cuarto (SRRC), la Confederación de Asociaciones Rurales de Chaco y Formosa (Chafor), la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ) y la ya citada CRA, organizaron una asamblea donde participaron unos 900 propietarios (según el diario Clarín del 8/4) de las provincias de Córdoba, Formosa, Chaco, Catamarca, La Rioja, San Luis y La Pampa. El documento, aprobado y firmado por las entidades mencionadas, proponía:

“la defensa [contra] las agresiones al sector ganadero por parte del presidente Kirchner”.

la separación de su cargo del secretario de Agricultura, Miguel Campos: “*Que busquen interlocutores válidos y no a Campos*”.

el lanzamiento de una campaña nacional de prensa para contrarrestar “*las mentiras del gobierno*” (C 8/4).

Al mismo tiempo, cada una de las corporaciones intervino a través de sus propios dirigentes. Así, en la SRRC, Delfor Maldonado, criticó duramente el convenio establecido entre el gobierno y las entidades rurales para mantener el precio de las carnes: “*Es un acuerdo mentiroso. Se firmó exclusivamente con el propósito de desalentar estas reuniones de productores y nosotros creemos firmemente que se trata de un acuerdo de cumplimiento imposible*”. El mismo dirigente amenazó con la inminente realización de medidas de lucha: “*Se puede venir el paro, hay que ver los pasos del Gobierno*” (C 8/4).

En idéntico sentido, se manifestó el titular de CARTEZ, Ricardo Osella, para quien el acuerdo de precios fue “*firmado bajo presión*”. Osella no dudó en polarizar el enfrentamiento retórico con Kirchner: “*Señor Presidente, la patria ganadera al igual que los argentinos está cansada y tuvo que soportar a la patria sindical, a la patria contratista, y no aguantamos la presión de la patria montonera*” (C 8/4).

Horacio Delguy, presidente del Frente Agropecuario Nacional (FAN), entidad que no firmó el acuerdo de precios con el gobierno, cuestionó: “*¿Qué beneficios hay para el productor? Acá se firmó algo donde el sector productivo no recibe nada; sólo hay beneficios para el sector exportador*” (LN 11/4).

Cerrando el mes de abril, la Sociedad Rural de San Luis organizó en Villa Mercedes otro mitín gremial que contó con la presencia de los dirigentes de los otros niveles de la organización de los propietarios de la tierra y del ganado: CARTEZ y Carbap en el nivel regional, y CRA en el nivel nacional. Allí, los convocados llamaron a la organización de un paro nacional cuya determinación, en rigor, no ha quedado por el momento resuelta.

A partir de esto, en la CRA, el vicepresidente Néstor Roulet admitió que “*si las próximas asambleas de los productores asociados a la entidad le dan el mandato al Consejo Directivo de CRA de llamar a un paro agropecuario, éste no podrá desoír el pedido*”. Por su parte, Luciano Miguens, de la SRA, justificó la posición explicitada en San Luis, explicando que la misma “*es la exteriorización del malestar de un sector que viene dando señales positivas, privilegiando el diálogo [y que], sin embargo, no vio señales igual de positivas por parte del Gobierno. En la medida en que estas señales no se den, el malestar y las asambleas continuarán. Y la SRA deberá atender y acompañar ese sentimiento*” (LN 30/4).

Como habíamos comenzado a observar en la anterior edición del *Análisis...* (p.19), el mes pasado se profundizó la *descentralización de la protesta* de la burguesía rural. Dicha táctica —basada en la organización de una suma de acciones más radicalizadas desplegadas en diversos puntos del interior, y protagonizadas por los nucleamientos más cercanos a la base (niveles distrital, municipal o provincial) pero con apoyo abierto de las entidades nacionales (CRA y SRA)— permite decir y hacer a estas organizaciones menores lo que las representaciones nacionales no dicen y hacen por el momento. Hasta ahora, se han mostrado de cara a la sociedad (más la SRA que la CRA) como los garantes de la paz social, capaces de contener la agitación del “interior”, negándose a evidenciar su intransigencia en la defensa de sus intereses sectoriales. También, las conducciones nacio-

nales del campo se han negado a “patear la mesa” de negociación, fundamentalmente para evitar una escalada en la lucha, dándole un motivo más de cohesión a la *alianza social* en el gobierno, formada por una *fracción del capital concentrado en la Argentina* –subsidiada con las retenciones aplicadas al campo– y por una *fracción de la clase obrera y el pueblo en general*.

Por otro lado, dentro de la oposición a la política oficial, la fuertemente opositora vicepresidenta de Carbac, Analía Quiroga, dijo que *“el problema es que los salarios no están acorde. Tenemos claro que la gente no tiene poder adquisitivo para comprar carne. Hay que subsidiar la carne hasta que haya una recomposición salarial”* (LN 3/4). La intervención, para nada inocente, juega un doble papel.

Primero, plantea abiertamente que los aumentos de la carne –debidos a la creciente demanda internacional– los paguen los capitales vinculados a la industria y a los servicios –mediante un aumento de salario a sus trabajadores–, o bien que se haga cargo el propio Estado, subsidiando al campo.

Segundo, opera con la intención de fracturar la contradictoria *alianza social* establecida entre una fracción del capital y una capa del movimiento obrero organizado –expresado en sus organizaciones sindicales formales–, partes que se han enfrentado en los últimos meses en la disputa por el nivel del salario.

No han faltado en el frente opositor voces del exterior. La primera llegó desde uno de los principales demandantes de productos y cortes cárnicos argentinos: Rusia. El Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de la Federación Rusa, Georgi Petrov, amenazó con perjudicar a los productores y vendedores en la Argentina, diciendo que *“el lugar que dejan unos proveedores lo ocupan otros y nuestros importadores no duermen; ya están buscando alternativas”* (LN 4/4). Casi al mismo tiempo, desde el Instituto para las Finanzas Internacionales (IIF), nucleamiento de las principales entidades financieras del mundo, se sostuvo en un informe que la Argentina *“parece confiar en controles de precios distorsivos para dominar la inflación en vez de hacer el necesario ajuste monetario (...) El mayor riesgo en esta coyuntura es una aceleración de la inflación y el peligro es que ésta dispare una espiral salarial”* (LN 5/4).

La lucha entre los frigoríficos y los distribuidores (carnicerías)

Como parte de la lucha por la regulación de la producción y la distribución de la carne vacuna –y su expresión monetaria: el precio–, se fue desarrollando en el último mes la disputa entre la industria frigorífica y los vendedores vinculados al mercado interno (carnicerías).

El Presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías de Capital Federal, Alberto Williams, denunció a principios de abril que *“si el mercado sigue bajando nosotros lo tenemos que ver en las boletas que nos mandan los proveedores. Las carnicerías no somos formadores de precios”* (LN 5/4). Un día después, ampliaba su crítica englobando a los productores y a las empresas de la industria frigorífica: *“Cuando tengamos esas bajas en la boleta [en los precios de los cortes y productos cárnicos] las vamos a trasladar,*

pero que no lo anuncien, que lo hagan. Quedan bien con el Gobierno y después le echan la culpa al carnicero, pero ellos no trasladan la caída de las cotizaciones de la hacienda” (LN 6/4).

Del “otro lado”, desde las plantas frigoríficas, explicaron que los descensos en los precios de sus productos *“se han trasladado al valor de venta de media res a salida de frigorífico (...) Estos porcentajes de baja deberían reflejarse en los precios de venta al consumidor”*.

En este mismo sentido, el presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes de la Argentina (Cicra), Miguel Schiaritti, acusó que *“la cadena minorista (carniceros) se está apropiando de una rentabilidad extra porque la industria ya trasladó bajas en sus productos”* (LN 6/4).

Los productores rurales nucleados en la Carbac no tardaron en alinearse con los frigoríficos. Su presidente, Javier Jayo Ordoqui, planteó que *“en el Mercado de Liniers ha bajado seriamente el precio de la carne. Tendría que reflejarse en las carnicerías a la brevedad”* (C 15/4).

La crítica al intervencionismo del estado nación

Una vez que el gobierno del Estado anunció la novedosa imposición de precios referenciales, afectando a todas las categorías del ganado vacuno, la CRA, en un comunicado, declaró: *“Ante las medidas adoptadas unilateralmente por el Gobierno que profundizan la intervención estatal en el mercado de carnes, CRA manifiesta su preocupación por el efecto que las mismas pueden tener sobre el futuro de la ganadería nacional, razón por la cual no las ha avalado, ni con su firma ni con su presencia en el anuncio de las mismas”* (C 22/4). Al mismo tiempo, en la entidad, profundizaron la crítica más general, en el sentido de los límites de la recuperación de las funciones del Estado nación, en cuanto a la organización de ciertas instancias de la economía: *“Es más intervencionismo y significa la aplicación de precios máximos”* (LN 22/4).

En defensa de la liberalización máxima de la economía, el editorial del diario La Nación se expresó como la tribuna fundamental de la línea política general de los capitales más concentrados del campo: *“Nuestra historia de la intervención del gobierno en los mercados en general es tan copiosa como nefasta. Mucho más cuando se trata de la carne vacuna, tanto por su influencia en el índice del costo de vida como por su participación en la cultura alimentaria de la población”*. No obstante la *copiosidad* de regulaciones estatales en el mercado del ganado, a decir del editorialista, entre los cuales éste destaca –por lo nefasto– al primer gobierno de Juan Domingo Perón, nada parece compararse con la catástrofe representada por la actual gestión de Kirchner. *“Nunca se había recurrido, en cambio, al sorprendente y altamente perjudicial expediente de prohibir las exportaciones. No se repara tampoco hoy, como está siendo demostrado, en que una intervención lleva a otra. El resultado de tales políticas ha sido medio siglo de estancamiento ganadero (...) Se pretende controlar la inflación regimentando los precios, sin atender a las verdaderas causas de este venenoso flagelo. El pasado vivido muestra que la represión de la inflación mediante los citados instrumentos conduce finalmente a un disloque de la economía toda”* (LN 29/4).

La intervención del Estado nación en el conflicto social: otros límites de la *alianza social* (o “que la lucha se vuelva armónica”)

Como hemos observado en el último *Análisis...*, la preocupación por la crisis institucional y de representatividad que muestran diversos sectores del capital se ha ido acentuando desde 2001 a esta parte, al calor de los diversos conflictos locales que se vienen sucediendo en nuestro país. El mes pasado vimos cómo los dos principales medios gráficos nacionales, La Nación y Clarín, expresaban seria preocupación ante el avance de la acción directa y los métodos de democracia *inmediata* que se vienen desarrollando en los conflictos señalados, por contraponerse a la democracia representativa. Se trataría, por tanto, de una violación del artículo constitucional que señala que “*el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes*”.

Durante el mes de abril, esta preocupación comenzó a delinear —al menos desde los editoriales de La Nación y Clarín— la exigencia al gobierno del Estado para que utilice todos sus métodos de intervención en dichos conflictos, en pos de *recomponer el orden*.

Más arriba, veíamos cómo las distintas fracciones del capital local disputaban por el grado de intervención que el Estado debe tener respecto de la economía. Resulta interesante, entonces, observar qué opinión transmiten estas mismas fracciones de capital, al posicionarse sobre la necesidad o no de intervención estatal en el control social y político.

Haremos referencia a tres editoriales, por ser los más explícitos y demostrativos de lo que queremos señalar, aunque estas ideas se repiten permanentemente, *entre líneas*, en las notas que dichos periódicos dedican al tratamiento de conflictos sociales y políticos.

En su editorial del día 9 de abril, titulado La ley de la calle, el matutino La Nación comienza planteando de esta forma la cuestión: “*¿A qué nos referimos cuando hablamos de la ‘ley de la calle’? Nos referimos a un fenómeno que se ha hecho frecuente en la vida argentina: la presencia de grupos tumultuosos y amenazantes que ocupan los espacios públicos y terminan, a menudo, doblándoles el brazo a los poderes del Estado. Esos grupos tienden en algunos casos a presionar al Poder Ejecutivo. Otras veces tratan de influir sobre el Congreso. En ciertas ocasiones, apuntan a condicionar a los tribunales de justicia. Esa presencia intimidatoria de sectores que se valen de la violencia para obligar a los poderes públicos a adoptar determinadas decisiones resulta altamente preocupante, pues contradice la Constitución y puede llegar a provocar una fuerte deformación del sistema institucional*”. Seguidamente, el editorialista de La Nación realiza un recorrido por conflictos recientes que incluyen acciones directas, señalando que los vecinos de Gualguaychú deciden sobre política internacional, los familiares y víctimas del incendio en Cromañón le imponen su parecer a la justicia y los trabajadores consiguen aumentos salariales mediante el corte de ruta o el bloqueo a empresas. Ante esta situación, el matutino advierte: “*Ahora bien, ¿quién dicta la ‘ley de la calle’? La dictan —en todos los casos— sectores inocultablemente minoritarios, que se autoadjudican públicamente el derecho a representar al conjunto de la sociedad. Una minoría de alborotadores, sin otro título que su capacidad para alterar el orden público, con el apoyo expreso o tácito de las autoridades, se otorga a sí misma el derecho de derogar la lógica de la democracia y de modificar a su arbitrio las*

leyes y los procedimientos institucionales”. Así planteadas las cosas, La Nación concluye: “*Es hora de que los argentinos comprendamos que una sociedad no puede ser gobernada por la ‘ley de la calle’. Es hora de que restablezcamos el pleno imperio del orden público y de la ley. Es hora de que tomemos conciencia de que una minoría ruidosa no puede sustituir a los órganos de la democracia representativa. Es hora de que recordemos que el mundo civilizado empleó muchos siglos de esfuerzo y de perfeccionamiento científico y moral para dejar atrás los métodos judiciales primitivos de la época medieval, basados en la venganza tumultuosa y en el protagonismo desbordado de las bordas populares, para sustituirlos por el procedimiento racional y científico que determinan los ordenamientos jurídicos del mundo moderno. Es hora de que sepamos que una cosa es el legítimo derecho a la libre manifestación de las ideas y de las opiniones, que se les debe reconocer a todos los sectores, y otra muy distinta es que grupos minoritarios revoltosos se adueñen de los espacios públicos y pretendan imponer sus designios al conjunto de la sociedad, con prepotencia y con manifiesta ilegitimidad. Es necesario que el Estado vuelva a concentrar en sus manos el pleno imperio de la fuerza pública, con absoluto respeto por el juego armonioso de las instituciones democráticas y de los procedimientos institucionales y legales. Es necesario que la “ley de la calle” sea sustituida por la ley de la razón y por el legítimo poder que emana de la Constitución y del Estado de Derecho.*” (LN 9/4). Es llamativa la forma redundante en que La Nación hace explícitas sus necesidades como vocero del capital en su conjunto, presentándolas como el interés general.

En el mismo sentido, unos días más tarde, bajo el título *Cuando el Estado cede atribuciones*, el matutino Clarín recorría en su editorial los diversos conflictos con las características señaladas, y advertía: “*Se trata, en suma, de signos de debilitamiento del Estado en el ejercicio de funciones específicas, situación que beneficia a los grupos más decididos a aprovechar esta circunstancia y perjudica a la gran mayoría de la ciudadanía y, en el caso de Entre Ríos, a los intereses nacionales*” (C 20/4).

Ese mismo día, nuevamente un editorial de La Nación, esta vez titulado *El imperio del desorden público*, recorría los diversos conflictos e insistía sobre el problema señalado, poniéndole esta vez nombre a la acción reclamada al Estado: “*Como señalamos en nuestro editorial del 9 del actual, es hora de que los argentinos —y, en particular, las autoridades— comprendamos que una sociedad no puede ser gobernada por la llamada ‘ley de la calle’. Ni una minoría de agitadores puede reemplazar a los órganos de la democracia representativa o anular los procedimientos democráticos, ni se puede actuar con temor de aplicar la ley, pensando que la represión legal y la garantía del orden público pueden ser sinónimos de autoritarismo*” (LN 20/4).

Como vemos, desde diversas fracciones del capital —tanto desde aquellas que permanentemente reclaman que el Estado no intervenga en la economía para que “mande el mercado”, como desde las que aplauden ciertas intervenciones estatales en favor de distribuir la ganancia entre las diversas fracciones del capital—, se exige al unísono que el Estado intervenga en los conflictos sociales que no se encauzan en *el juego armonioso de las instituciones*. De ello podemos deducir que, para estas voces, el conflicto debe trocarse en juego armonioso, y tal armonía la brinda el canal de la representatividad y la legalidad. Es decir que el conflicto, cuando niega dichos canales y se expresa a través de la participación y la acción directa, deja de ser *armonioso*, para volver a ser conflicto, es decir, para volver a ser *lucha*.